



PE Juzgado 2

Fecha de emisión de notificación: 21/abril/2026

Sr/a: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, MARIELA
EDITH ARROYO, JONATHAN DENIS NOVELLO,
CARLOS SEBASTIAN BOGAO, LEONARDO
MARTIN ADOLFO TORRES, MARIA JOSE
BALESTRETTI, AGUSTIN TOMAS GASQUET,
WALTER LIONEL SZCERB, TERESA GRACIELA
CHIARITO

Domicilio: 20183176766

Carácter: Sin Asignación

Observaciones especiales: Sin Asignación

Copias: S

Tribunal: JUZGADO PENAL ECONOMICO 2 - sito en Av. De Los Inmigrantes 1950, 2° piso, oficina 204

Tipo de domicilio

Electrónico

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 1460 / 2018 caratulado: IMPUTADO: DIA ARGENTINA S.A. Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

null Según copia que se acompaña.

Queda Ud. legalmente notificado

Buenos Aires, de abril de 2026. FBS

Fdo.: HERNAN VICENTE PANDIELLA, SECRETARIO DE JUZGADO



Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Buenos Aires, 20 de abril de 2026.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa N° **CPE 1460/2018**, caratulada “**DIA ARGENTINA S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769**”, del registro de la Secretaría 4 de este Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, a mi cargo, y respecto de la situación procesal de **DIA ARGENTINA S.A.** (C.U.I.T. N° 30-68584975-1; constituida el 3/7/1995 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 18/9/1995, bajo el N° 8587 del libro 117, tomo A, de Sociedades Anónimas; con domicilio principal en Juan Francisco Seguí N° 4646, C.A.B.A., fiscal en la Avenida Rivadavia N° 8875, piso 1, C.A.B.A., y constituido en las C.U.I.T. vinculadas a los Dres. Guillermo VIDAL ALBARRACIN y Federico BECERRA).

Y CONSIDERANDO:

I.- Antecedentes

I.a.- Denuncia

1º) Que las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia formulada por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la ex A.F.I.P., a fin de que se dispongan medidas de urgencia contra la firma **DIA ARGENTINA S.A.**, con el objeto de esclarecer diversas maniobras que podrían ser constitutivas del delito de evasión previsional (cfr. fs. 1/22).

En aquella presentación, el organismo recaudador efectuó una proyección de los montos de la posible evasión previsional que se denunció con relación a los períodos fiscales mensuales 6/2014, 12/2014, 1/2015, 2/2015 y 5/2015 a 5/2018.

En ese orden, conforme se desprende del acápite III, titulado “HECHOS”, de la referida presentación, se inició una investigación en la sede del fisco nacional, como consecuencia de la recepción de un oficio judicial emitido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 10, en el marco de la causa N° CPE 226/2015, caratulada: “**DÍA ARGENTINA S.A.; COTO GUTIÉRREZ, ANTONIO; MIRANDA, SEBASTIÁN MARTÍN; CERF, GASTÓN EDGAR S/ INF. LEY 24.769**”, la cual habría sido iniciada a raíz de la denuncia entablada por Gustavo Raúl ARO, en contra de la firma ya mencionada, como consecuencia de haber tomado conocimiento, en el mes de marzo del año 2015, acerca de que “...su salario había sido embargado por la AFIP a raíz de un reclamo por incumplimiento en el pago de las cargas sociales de los empleados por el (sic) registrados en su carácter de franquiciado de la firma **DIA ARGENTINA S.A.**, aseverando no ser el autor de esa infracción tributaria que motivara la ejecución señalada, pues no se considera empleador, sino empleado en relación de dependencia de la firma mencionada...”.

En ese contexto, ARO habría relatado situaciones que darían cuenta de que no se encontraba en una real relación de franquicia con la firma **DIA ARGENTINA S.A.**, sino ante un vínculo de dependencia en el que la empresa impartía directivas y condiciones que no encuadraban en la verdadera figura citada.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Por su parte, de la denuncia también surge que, en el marco de los autos mencionados, que tramitaron ante el juzgado 10 del fuero, la otrora Fiscalía Nacional en lo Penal Tributario 1 postuló la desestimación de la denuncia realizada por ARO, por no contar con la totalidad de los elementos y precisiones necesarios para poder requerir la instrucción de la causa, sin perjuicio de lo cual solicitó la extracción de testimonios de dicho expediente y su remisión a la ex A.F.I.P., con el objeto de evaluar la pertinencia de disponer el inicio de algún procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y previsionales a la firma **DIA ARGENTINA S.A.**, lo cual fue realizado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10.

En consecuencia, a raíz de los testimonios remitidos, la ex A.F.I.P. dio comienzo a diversas tareas de investigación y fiscalización, a partir de las cuales se habría logrado verificar que la calidad autónoma de los “franquiciados” se vería opacada por diferentes realidades que permiten inferir que no se trataría de verdaderos emprendedores buscando contar con el derecho a explotar la marca, destacándose que diversos franquiciados han denunciado a la contribuyente **DIA ARGENTINA S.A.**, reclamando el reconocimiento de la verdadera relación laboral que los unió desde un comienzo (cfr. fs. 27/49).

I.b.- Actividad instructora e hipótesis acusatorias

2º) Que, radicado el expediente en este juzgado, se dispuso delegar la dirección de la investigación en el representante de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 1, en los términos del artículo 196 del C.P.P.N. (cfr. fs. 62/66, último párrafo). Cabe mencionar que, a pesar de la incompetencia planteada, tanto de oficio como a requerimiento de esa fiscalía, en el entendimiento de que las presentes actuaciones debían acumularse a los autos N° CPE 226/2016, del registro del juzgado 10 del fuero, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió que esta judicatura debía continuar entendiendo en la causa (cfr. fs. 72/73 y fs. 40/41 del Incidente de Incompetencia N° CPE 1460/2018/3).

Así las cosas, tal como expuso el Fiscal en el acápite III del dictamen mediante el cual solicitó la citación a prestar declaración indagatoria de los imputados, en primer lugar, se inició la instrucción con tareas de inteligencia orientadas a identificar la titularidad de los canales de comunicación utilizados para la captación de supuestos franquiciados. Mediante informes de empresas de telefonía y de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina, se verificó que la línea telefónica 1169109146 pertenecía a **DIA ARGENTINA S.A.** y que el dominio de correo electrónico “@diagroup.com” correspondía a la firma internacional DIA CORPORATE. A partir de ello, se ordenó la intervención de -entre otras- dicha línea, cuyas transcripciones permitieron identificar a un encargado de la organización de locales (“Rodrigo Javier”) y confirmar una relación de clara subordinación de los supuestos terceros hacia la contribuyente, ubicando además la sede administrativa central en la calle Juan Francisco Seguí N° 4646, C.A.B.A. (cfr. documentación reservada y fs. 128, 140/147, 152, 160/166, 183, 186, 188/190, 195, 201/213 y 215/207).





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Seguidamente, se libró una orden de presentación con allanamiento en subsidio sobre el domicilio mencionado, procedimiento que resultó en el secuestro del listado completo de tiendas, contratos celebrados entre 2014 y 2018 (bajo modalidades de franquicia, gerenciamiento y consignación) y una voluminosa cantidad de archivos informáticos y correos electrónicos corporativos (cfr. fs. 210/211, 214, 216/222 y 260/274). De este material se obtuvo acceso a las auditorías realizadas por la empresa externa "CONA" sobre el personal de las tiendas, revelando que la contribuyente mantenía el control operativo sobre la totalidad de los empleados formalmente registrados por terceros.

Sobre esto último, el fiscal sostuvo que el control era tan estricto que el sector de Recursos Humanos de **DIA ARGENTINA S.A.** evaluaba y rechazaba a los empleados de confianza de los franquiciados, así como también que otorgaba permanentemente anticipos de dinero a los titulares de las tiendas para que pudieran hacer frente a los gastos corrientes de los locales, dejando en evidencia su total insolvencia y dependencia económica.

Posteriormente, se realizó un exhaustivo cruzamiento de datos a raíz del cual se detectó que, sobre un universo de 1072 supuestos franquiciados, existía una práctica sistemática de rotación donde diversos sujetos se hacían cargo de una misma tienda o un mismo sujeto era titular de múltiples tiendas de forma indistinta según el arbitrio de la compañía. Asimismo, el análisis de las nóminas de empleados permitió comprobar que 2267 trabajadores prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que demostró que la dependencia técnica y jurídica era directa con **DIA ARGENTINA S.A.**, siendo los franquiciados meros “empleados de mayor jerarquía” o jefes de sucursal.

En una etapa posterior de la investigación, el Ministerio Público Fiscal ordenó al organismo recaudador el inicio del procedimiento previsto por el artículo 18 del Régimen Penal Tributario, para la reconstrucción de la base imponible y la correspondiente determinación de oficio de la deuda (cfr. fs. 306). El trabajo de fiscalización, basado en la documentación secuestrada y en decenas de declaraciones testimoniales, expuso que los candidatos a franquiciados carecían de perfil empresario y solvencia económica, siendo reclutados incluso entre jubilados o personas sin experiencia previa. Se constató que la inversión inicial era ínfima o nula -limitándose en muchos casos a la firma de un pagaré en blanco- y que la firma ejercía facultades exclusivas de selección de personal, fijación de horarios, recaudación de caudales y decisión sobre el cierre de locales, otorgando a los terceros una comisión fija del 5%.

En cuanto al resultado de las declaraciones testimoniales, el fiscal enumeró las siguientes conclusiones:

- los franquiciados no elegían la tienda, sino que les era impuesta;
- los trámites de locación y habilitación comercial los realizaba exclusivamente **DIA ARGENTINA S.A.**;
- los tickets y controladores fiscales operaban a nombre de **DIA ARGENTINA S.A.**;





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

- la empresa determinaba la cantidad de empleados a contratar;
- todo el dinero en efectivo era retirado por empresas de caudales contratadas por **DIA ARGENTINA S.A.**, recibiendo ellos solo un 5% de comisión (sujeto a descuentos por diferencias de inventario); y
- ante conflictos o demandas laborales de los empleados de la tienda, era **DIA ARGENTINA S.A.** quien negociaba y arribaba a acuerdos directos, actuando como el verdadero empleador.

Además, el dictamen destaca un correo electrónico donde el área de expansión de **DIA ARGENTINA S.A.** proponía utilizar contactos con directores del PAMI para reclutar jubilados como “socios estratégicos”; subrayando el fiscal que el interés de la empresa no radicaba en el capital o la experiencia comercial de los jubilados (que era nula), sino en que poseían “garantía propietaria” y familiares para trabajar.

Por su parte, se incorporó el análisis de once sentencias definitivas del fuero laboral que ya habían declarado la nulidad de estos contratos por simulación y fraude (artículos 14 y 29 de la Ley de Contrato de Trabajo), reconociendo a **DIA ARGENTINA S.A.** como empleadora directa. Como resultado de todo el iter probatorio reseñado, la ex A.F.I.P. procedió a realizar el ajuste correspondiente por los aportes y contribuciones de la seguridad social evadidos en todos los meses de los años 2014 y 2018.

3º) Que, en ese contexto, el Ministerio Público Fiscal (cfr. escrito identificado en el Sistema Lex100 como "07/04/2021 - DICTAMEN. SOLICITA INDAGATORIA [21/12/2020 11:09]") y la querella -A.R.C.A.- (cfr. escritos identificados en el Sistema Lex100 como "26/06/2020 - AUTO 25-6-20. ORDENA MEDIDAS (PARTE 2 DE 17) [25/06/2020 13:16]", "26/06/2020 - AUTO 25-6-20. ORDENA MEDIDAS (PARTE 4 DE 17) [25/06/2020 13:16]", "26/06/2020 - AUTO 25-6-20. ORDENA MEDIDAS (PARTE 5 DE 17) [25/06/2020 13:16]", "26/06/2020 - AUTO 25-6-20. ORDENA MEDIDAS (PARTE 8 DE 17) [25/06/2020 13:16]" y "26/06/2020 - AUTO 25-6-20. ORDENA MEDIDAS (PARTE 13 DE 17) [25/06/2020 13:16]") postularon la citación a indagatoria de **DIA ARGENTINA S.A.**, Antonio COTO GUTIÉRREZ, Alejandro Javier GRANDE, Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO, Fernando Alberto LAVENAS, Philippe DUCAROUGE, Emilio Ignacio HARDOY y José Luis LÓPEZ, al considerar que existían elementos suficientes para sospechar que la empresa habría evadido el pago de aportes y contribuciones correspondientes al Sistema de la Seguridad Social entre los años 2014 y 2018.

La hipótesis acusatoria del fiscal sostiene que **DIA ARGENTINA S.A.** se valió de figuras contractuales como la “franquicia”, la “concesión” o la “consignación” para interponer a terceros y ocultar la verdadera relación de dependencia laboral que mantenía, no solo con el personal que prestaba servicios en los locales, sino también con los propios franquiciados. A raíz de esta maniobra defraudatoria, el Ministerio Público Fiscal encuadró los hechos investigados en las previsiones del delito de evasión agravada de los recursos de la seguridad social.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Para fundamentar su postura, el dictamen fiscal destacó diversas medidas probatorias que evidenciarían el fraude laboral y la consecuente subordinación de los franquiciados hacia la contribuyente. En primer lugar, señaló que del análisis de intervenciones telefónicas y de correos electrónicos corporativos se desprende que la empresa era la verdadera encargada de seleccionar, capacitar, reubicar e incluso decidir los despidos del personal de las tiendas, así como de determinar unilateralmente la apertura, continuidad o el cierre definitivo de los locales comerciales. En segundo lugar, resaltó que un gran número de franquiciados figuraron indistintamente a cargo de diferentes tiendas a lo largo de los años y que, a su vez, del cruzamiento de nóminas se detectaron 2267 empleados que prestaron servicios para distintos franquiciados, lo que demostraría empíricamente que la dirección y la relación de dependencia era directa con la compañía.

Finalmente, la acusación fiscal remarcó que las condiciones exigidas operativamente no se condecían con la asunción de un verdadero riesgo empresarial. Al respecto, precisó que para acceder a la franquicia no se requería una inversión inicial significativa de dinero, pero sí se exigía el libramiento de un pagaré en blanco y el otorgamiento de garantías. Asimismo, el fiscal hizo hincapié en que, según surgía de los propios informes socioambientales de la firma, los “socios estratégicos” reclutados carecían de experiencia en el rubro y presentaban un perfil socioeconómico que no se correspondía con la envergadura del emprendimiento a su cargo, reforzando así la convicción de que el sistema de franquicias implementado constituía una estructura orientada fundamentalmente a minimizar costos laborales y a eludir el pago de las obligaciones previsionales.

En la misma línea, la querella consideró que **DIA ARGENTINA S.A.** implementó una estructura de “simulacro” de franquicias para ocultar relaciones laborales de dependencia. Sostuvo que esta maniobra constituye un ardid orientado a la evasión de aportes y contribuciones a la seguridad social, mediante la interposición de terceros (franquiciados) para enmascarar al verdadero sujeto obligado. Según la querella, la empresa se benefició ilegalmente al aplicar una alícuota de contribuciones patronales reducida (17%), cuando por su envergadura le correspondía tributar el 21%.

La parte querellante destacó que la prueba recolectada demuestra una subordinación jurídica, técnica y económica incompatible con la autonomía de una franquicia comercial. Entre los principales indicadores de control centralizado, señaló que **DIA ARGENTINA S.A.** era la encargada exclusiva de seleccionar, capacitar y entrenar tanto a los supuestos franquiciados como al resto del personal de las tiendas. Asimismo, remarcó que la empresa disponía unilateralmente el traslado de empleados entre diferentes sucursales y decidía sobre el despido de trabajadores y el cierre definitivo de locales, sin intervención real de los supuestos titulares.

En cuanto a la operatoria económica, la querella enfatizó que los franquiciados no poseían control sobre los ingresos, ya que la recaudación en efectivo era retirada directamente





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

por empresas de caudales contratadas por la sede central de **DIA ARGENTINA S.A.**, mientras que los pagos con tarjeta se acreditaban de forma directa en las cuentas de la compañía. Precisó que el esquema despoja al tercero de todo riesgo empresarial, reduciéndolo a la percepción de una comisión fija sobre ventas (5%) y obligándolo a operar bajo directivas estrictas de supervisores de la firma. Por último, hizo hincapié en que el perfil socioeconómico de los franquiciados reclutados no se correspondía con el de empresarios independientes, calificándolos como meros “jefes de tienda” jerarquizados bajo la apariencia de comerciantes autónomos.

Así las cosas, luego de la producción de una serie de medidas y en línea con lo oportunamente dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y la querella, este juzgado citó a prestar declaración indagatoria a **DIA ARGENTINA S.A.**, Antonio COTO GUTIÉRREZ, Alejandro Javier GRANDE, Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO, Fernando Alberto LAVENAS, Philippe DUCAROUGE, Emilio Ignacio HARDOY y José Luis LÓPEZ (cfr. fs. 1022).

I.c.- Cuestiones incidentales

4º) Que, no obstante lo expuesto en el párrafo anterior, a raíz de un planteo formulado por la defensa técnica de los imputados, se formó el Incidente de Acogimiento al Régimen previsto a la Ley 27.541 N° **CPE 1460/2018/4**, en el marco del cual este juzgado resolvió declarar extinguida la acción penal -en los términos previstos por el artículo 10 de la ley referida- respecto de los imputados y dictar sus sobreseimientos (cfr. fs. 454 del incidente N° CPE 1460/2018/4).

Aquel pronunciamiento, fue confirmado por la Alzada respecto a Alejandro Javier GRANDE, Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO, Fernando Alberto LAVENAS, Philippe DUCAROUGE, Emilio Ignacio HARDOY y José Luis LÓPEZ, y revocado parcialmente con relación a **DIA ARGENTINA S.A.** y Antonio COTO GUTIÉRREZ (cfr. fs. 509 del incidente N° CPE 1460/2018/4). Respecto de COTO GUTIÉRREZ, luego de una nueva presentación incoada por su defensa, se dictó un nuevo sobreseimiento en los mismos términos, en el marco del Incidente de Acogimiento al Régimen previsto a la Ley 27.541 N° **CPE 1460/2018/8**, el cual fue confirmado por la Alzada (cfr. fs. 54/59 y 91 del incidente N° CPE 1460/2018/8).

Cabe destacar que lo resuelto por la Alzada en ambos incidentes se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los recursos de queja correspondientes a los incidentes de recurso extraordinario Nros. **CPE 1460/2018/5/1/1/RH7** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por los Dres. Guillermo VIDAL ALBARRACIN y Federico BECERRA, en representación de **DIA ARGENTINA S.A.**, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el 20/5/2025 en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/5/1, vinculado al rechazo de la aplicación de los beneficios de la ley 27.541 respecto de la referida persona jurídica), **CPE 1460/2018/6/1/1/RH8** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por la A.R.C.A. en su carácter de parte querellante, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

20/5/2025 en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/6/1, relativo a la concesión de la aplicación de los beneficios de la ley 27.541 con relación a Emilio Ignacio HARDOY, Alejandro Javier GRANDE, José Luis LÓPEZ, Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO, Fernando Alberto LAVENAS y Philippe DUCAROUGE) y **CPE 1460/2018/13/1/1/RH10** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por la A.R.C.A. en su carácter de parte querellante, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/13/1, relativo al sobreseimiento dictado respecto de Antonio COTO GUTIÉRREZ en los términos de la ley 27.541).

Por otra parte, en el marco del Incidente de Extinción de la Acción N° **CPE 1460/2018/10**, se rechazó un nuevo planteo efectuado por la defensa técnica de **DIA ARGENTINA S.A.**, mediante el cual solicitó que se declare extinguida la acción penal seguida a su respecto y se dicte su sobreseimiento en los términos del artículo 336 -inciso 1- del C.P.P.N., por entender que resulta aplicable retroactivamente como ley penal más benigna la ley 27743. Dicho rechazo fue confirmado por la Alzada y actualmente se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco del recurso de queja correspondiente al incidente de recurso extraordinario N° **CPE 1460/2018/14/1/1/RH11** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por los Dres. Guillermo VIDAL ALBARRACIN y Federico BECERRA, en representación de DIA ARGENTINA S.A., contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/14/1, vinculado al rechazo de la aplicación de los beneficios de la ley 27743 respecto de la referida persona jurídica).

Así las cosas, el 18/12/2025 se le recibió declaración indagatoria a **DÍA ARGENTINA S.A.**, a través de su apoderado, oportunidad en la cual se le imputó la presunta evasión de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social, de todos los meses correspondientes a los años 2014 a 2018, ambos inclusive, por montos superiores a la suma de un millón de pesos (\$ 1.000.000) en cada período mensual (cfr. fs. 1745/1749). Cabe destacar que, en dicha fecha, se encontraba vigente el Régimen Penal Tributario establecido por el artículo 279 de la Ley 27.430, que establecía: “**ARTÍCULO 5°.- Evasión simple.** *Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000) por cada mes.* **ARTÍCULO 6°.- Evasión agravada.** *La prisión a aplicar se elevará de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años cuando en el caso del artículo 5°, por cada mes, se comprobare cualquiera de los siguientes supuestos: a) El monto evadido superare la suma de un millón de pesos (\$ 1.000.000); b) Hubieren intervenido persona o personas humanas o jurídicas o*





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

entidades interpuestas, o se hubieren utilizado estructuras, negocios, patrimonios de afectación y/o instrumentos fiduciarios, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de cuatrocientos mil pesos (\$ 400.000) (...).

Con posterioridad a dicho acto procesal, el 2/1/2026 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.799, la cual, a través de sus artículos 6 y 7, elevó los montos mínimos para los tipos penales investigados en estas actuaciones (artículos 5 y 6 -incisos a y b- de la Ley 27.430), quedando actualizados en los siguientes valores:

- evasión simple (artículo 5): \$ 7.000.000 por mes;
- evasión agravada por monto (artículo 6 -inciso a-): \$ 35.000.000 por mes; y
- evasión agravada por utilización de interpósita persona (artículo 6 -inciso b-): \$ 14.000.000 por mes.

En consecuencia, la defensa realizó un planteo que motivó la formación del Incidente de Extinción de la Acción N° **CPE 1460/2018/15**, en el marco del cual, el 16/4/2026, se dictó el sobreseimiento de **DIA ARGENTINA S.A.** por los hechos vinculados a los períodos 1/2014 a 5/2014, 7/2014 y 8/2014, en virtud de que los montos presuntamente evadidos en cada uno de los hechos mencionados quedaron por debajo del mínimo actualmente exigido para la configuración del tipo penal (\$ 7.000.000).

Además, por dicho pronunciamiento se dictó el sobreseimiento de **DIA ARGENTINA S.A.**, declarando extinguida la acción penal por prescripción, respecto a los hechos vinculados a los períodos 6/2014, 9/2014 a 11/2015, 1/2016 y 2/2016. Esta decisión se fundamentó en la aplicación de la Ley 27.799, que recategoriza la conducta como evasión simple. Por lo tanto, si bien los montos en dichos períodos superan los \$ 7.000.000, no alcanzan los \$ 35.000.000 (artículo 6 -inciso a-) ni los \$ 14.000.000 (artículo 6 -inciso b-), por lo que, considerando la fecha de presunta comisión de la evasión de cada mes y la primera citación a indagatoria como acto interruptivo (ocurrida el 5/4/2022), se concluyó que los períodos mencionados han prescripto.

En suma, de las circunstancias expuestas en el presente considerando, se colige que, en el estado actual de la causa, la acción penal seguida en autos se dirige únicamente contra la firma **DIA ARGENTINA S.A.**, por los hechos vinculados a los períodos mensuales **12/2015 y 3/2016 a 12/2018**.

I.d.- Descargo DIA ARGENTINA S.A.

5º) Que, al prestar declaración indagatoria, la defensa de **DIA ARGENTINA S.A.** presentó un descargo mediante el cual solicitó el sobreseimiento de su representada por inexistencia de delito o, de manera subsidiaria, el dictado de la falta de mérito (cfr. fs. 1685/1744).

En su descargo, los letrados defensores rechazaron categóricamente la hipótesis acusatoria que postula que el sistema de franquicias implementado constituya un negocio





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

fraudulento diseñado para encubrir relaciones laborales y evadir el pago de aportes a la seguridad social. Al respecto, argumentaron que la compañía utiliza un esquema de comercialización lícito, habitual y amparado por el principio de libertad de formas y el Código Civil y Comercial de la Nación. Sostuvieron que los franquiciados operan de manera independiente, asumen el riesgo económico de su propia actividad comercial y son quienes seleccionan, contratan, organizan y remuneran a su propio personal dependiente.

En relación con las directivas y auditorías que la empresa realiza sobre el funcionamiento de las tiendas, la defensa aclaró que estos controles no implican una subordinación jurídica, técnica o económica que denote una relación de dependencia. Por el contrario, explicaron que dichas medidas, que incluyen la verificación del pago de las cargas sociales, tienen una finalidad estrictamente preventiva. Buscan resguardar la imagen de la marca y evitar contingencias procesales derivadas de la responsabilidad solidaria que establece el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo ante eventuales incumplimientos de sus socios comerciales.

Por otra parte, la defensa cuestionó severamente la metodología utilizada por el organismo fiscal para la determinación de la supuesta deuda. Calificaron el cálculo de improcedente e inexacto por basarse en una proyección injustificada de apenas once sentencias laborales desfavorables, originadas por ex franquiciados conflictivos, hacia un universo de más de novecientas franquicias operativas en el período investigado. Subrayaron además el absurdo metodológico de haber incluido en el ajuste los aportes de empleados correspondientes a franquicias sobre las cuales recayeron sentencias laborales firmes que resultaron favorables a **DIA ARGENTINA S.A.**, validando expresamente el contrato comercial.

Para sustentar su postura, la presentación hizo hincapié en la existencia de vasta jurisprudencia y resoluciones administrativas que, según alegan, fue omitida por la acusación. Aportaron antecedentes de la Justicia Nacional del Trabajo donde se rechazaron demandas iniciadas por empleados y, fundamentalmente, sentencias que desestimaron los reclamos de ex franquiciados que pretendían ser reconocidos como empleados encubiertos, confirmando en todos los casos la naturaleza mercantil del vínculo. Asimismo, destacaron múltiples resoluciones del Ministerio de Trabajo que eximieron a la empresa de sanciones tras constatar que el personal se encontraba correctamente registrado por su verdadero empleador, es decir, el franquiciado.

Finalmente, la defensa concluyó que las conductas investigadas no logran configurar el aspecto objetivo ni subjetivo del delito de evasión imputado. Afirmaron que no existió ardid, engaño ni ocultamiento, dado que la compañía operó en todo momento con absoluta transparencia frente al fisco nacional. Encuadraron la operatoria corporativa dentro de la figura lícita de la “economía de opción”, argumentando que la estructura elegida no perseguía una finalidad evasiva. En este sentido, resaltaron que el esquema implementado carecía de lógica económica para defraudar, puesto que las comisiones abonadas a los franquiciados resultaban





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

económicamente superiores a las cargas laborales que hubieran correspondido de existir una relación de dependencia directa.

A su vez, la defensa respaldó su exposición mediante un amplio ofrecimiento probatorio. En materia documental, acompañaron cinco anexos (cfr. fs. 1236/1684), los cuales comprenden: copias de sentencias de la Justicia Laboral en las que la firma fue condenada únicamente de manera solidaria, rechazándose la figura del fraude laboral; fallos que eximieron a la mandante de toda responsabilidad ante reclamos de dependientes; cinco resoluciones judiciales favorables dictadas en el marco de demandas promovidas por los propios titulares de las franquicias; dictámenes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que absolvieron a la empresa de la aplicación de multas por empleo no registrado; y un reporte de auditoría elaborado por la firma internacional Bureau Veritas, mediante el cual se certifica la calidad de su sistema de franquicias en Argentina.

Adicionalmente, en el mismo escrito solicitaron la producción de prueba informativa, requiriendo el libramiento de oficios tanto a la A.R.C.A. como al Ministerio de Trabajo para incorporar antecedentes sobre inspecciones, actas de infracción y el estado de diversas actuaciones administrativas. También requirieron la realización de una pericia contable sobre los libros y registros de la compañía, orientada a dictaminar sobre la estructura del negocio, la modalidad operativa con los franquiciados, los derechos y obligaciones de las partes, el carácter variable de las retribuciones económicas y la ausencia de exclusividad comercial. Finalmente, propusieron la citación para prestar declaración testimonial de una nómina compuesta por más de veinte personas que se habrían desempeñado como titulares de franquicias durante el período objeto de investigación.

II.- Objeto procesal y calificación legal

6º) Que, expuestos los antecedentes del presente expediente, corresponde mencionar que, en el estado actual, su objeto procesal quedó delimitado por la presunta evasión de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social, por parte de **DÍA ARGENTINA S.A.**, en los períodos **12/2015** y **3/2016 a 12/2018**, por las siguientes sumas:

Periodo	Ajuste Fiscalización Franquicia - Aportes-	Ajuste Fiscalización Franquicia - Contribuciones-	Total Ajuste Fiscalización	Pagos a Término Franquiciados -Aportes-	Pagos a Término Franquiciados - Contribuciones-	Total Ajuste Fiscalización Menos Pagos a Término
2015/12	5.969.229,30	9.060.352,05	15.029.581,35	0	0	\$15.029.581,35
2016/03	4.040.763,78	6.134.709,99	10.175.473,77	130.400,67	138.797,78	\$9.906.275,32





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

2016/04	4.772.660, 91	7.245.876,08	12.018.536, 99	125.051,30	102.214,05	\$11.791.271, 64
2016/05	4.797.154, 39	7.283.889,10	12.081.043, 49	108.249,83	108.100,87	\$11.864.692, 79
2016/06	6.792.244, 51	10.311.405,08	17.103.649, 59	123.854,91	125.360,67	\$16.854.434, 01
2016/07	4.836.064, 36	7.342.465,82	12.178.530, 18	86.242,93	103.211,23	\$11.989.076, 02
2016/08	4.825.071, 07	7.326.425,41	12.151.496, 48	80.202,04	92.888,99	\$11.978.405, 45
2016/09	4.864.853, 17	7.387.050,37	12.251.903, 54	153.319,90	152.089,88	\$11.946.493, 76
2016/10	4.913.766, 79	7.466.697,44	12.380.464, 23	130.096,12	126.180,78	\$12.124.187, 33
2016/11	5.008.180, 39	7.610.711,81	12.618.892, 20	161.665,84	179.257,80	\$12.277.968, 56
2016/12	7.107.827, 87	10.799.909,94	17.907.737, 81	268.840,94	308.021,01	\$17.330.875, 86
2017/01	5.207.793, 37	7.915.331,27	13.123.124, 64	102.816,41	123.949,77	\$12.896.358, 46
2017/02	5.103.120, 56	7.755.779,20	12.858.899, 76	88.840,16	107.549,34	\$12.662.510, 26
2017/03	5.036.040, 39	7.653.958,32	12.689.998, 71	155.492,47	189.654,10	\$12.344.852, 14
2017/04	5.448.470, 56	8.280.938,46	13.729.409, 02	80.199,64	101.401,36	\$13.547.808, 02
2017/05	5.417.861, 42	8.235.548,28	13.653.409, 70	170.962,22	204.617,37	\$13.277.830, 11
2017/06	7.652.666, 74	11.633.011,01	19.285.677, 75	190.925,81	229.467,69	\$18.865.284, 25
2017/07	5.964.742, 19	9.066.803,64	15.031.545, 83	129.688,64	158.556,62	\$14.743.300, 57
2017/08	5.968.004, 14	9.071.134,38	15.039.138, 52	138.614,47	165.585,92	\$14.734.938, 13





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

2017/09	6.000.587, 65	9.121.010,20	15.121.597, 85	199.623,79	243.469,72	\$14.678.504, 34
2017/10	6.121.212, 48	9.305.024,27	15.426.236, 75	231.903,72	288.297,62	\$14.906.035, 41
2017/11	6.695.444, 52	10.172.709,90	16.868.154, 42	191.765,28	233.995,19	\$16.442.393, 95
2017/12	9.607.044, 41	14.595.250,57	24.202.294, 98	652.581,78	773.939,10	\$22.775.774, 10
2018/01	6.996.723, 76	10.629.954,94	17.626.678, 70	435.759,80	535.216,19	\$16.655.702, 71
2018/02	7.022.412, 30	10.525.813,80	17.548.226, 10	439.829,65	600.376,37	\$16.508.020, 08
2018/03	7.101.223, 80	10.644.230,07	17.745.453, 87	360.833,29	425.017,38	\$16.959.603, 20
2018/04	7.594.481, 10	11.382.416,20	18.976.897, 30	391.530,72	451.345,09	\$18.134.021, 49
2018/05	7.599.456, 32	11.389.567,72	18.989.024, 04	497.796,38	570.773,23	\$17.920.454, 43
2018/06	11.204.82 1,55	16.792.300,34	27.997.121, 89	459.073,72	527.548,11	\$27.010.500, 06
2018/07	8.019.794, 40	12.020.880,00	20.040.674, 40	424.728,75	486.283,11	\$19.129.662, 54
2018/08	8.450.385, 95	12.666.880,44	21.117.266, 39	513.679,31	589.701,22	\$20.013.885, 86
2018/09	8.760.458, 14	13.132.036,93	21.892.495, 07	464.296,50	538.963,93	\$20.889.234, 64
2018/10	9.797.857, 37	14.692.650,04	24.490.507, 41	636.360,31	744.587,88	\$23.109.559, 22
2018/11	9.910.424, 11	14.862.847,08	24.773.271, 19	603.016,08	700.768,59	\$23.469.486, 52
2018/12	14.290.67 8,82	21.419.676,67	35.710.355, 49	599.663,28	706.547,54	\$34.404.144, 67

Tal maniobra se habría llevado a cabo a partir de la utilización de la figura de "franquicias" y/o contratos de "concesión" o "consignación", en donde el verdadero vínculo entre "franquiciante"- "franquiciado", "concedente"- "concesionario" y "consignante"- "consignatario",





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

sería impuesto por la contribuyente referida, a los fines de establecer la interposición de terceros en la verdadera relación laboral con los empleados que prestan servicios en diversos locales, entre los cuales se encuentran los propios franquiciados.

7º) Que, teniendo en cuenta la fecha de comisión de los hechos investigados, corresponde encuadrarlos en las previsiones del artículo 8 -incisos a y b- de la Ley 24.769 (períodos **12/2015** y **3/2016** a **11/2017**) y artículo 6 -incisos a y b- del Régimen Penal Tributario establecido por la Ley 27.430 (períodos **12/2017** a **12/2018**).

No obstante ello, se reitera que, el 2/1/2026, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.799, la cual, a través de sus artículos 6 y 7, elevó los montos mínimos para los tipos penales investigados en estas actuaciones, quedando actualizados en los siguientes valores:

- evasión simple (artículo 5): \$ 7.000.000 por mes;
- evasión agravada por monto (artículo 6 -inciso a-): \$ 35.000.000 por mes; y
- evasión agravada por utilización de interpósita persona (artículo 6 -inciso b-): \$ 14.000.000 por mes.

Así las cosas, del análisis del texto de la Ley 27.799 se desprende que el legislador ha desincriminado aquellas conductas en las que las obligaciones tributarias involucradas no alcancen los nuevos montos mínimos establecidos como condición objetiva de punibilidad, motivo por el cual corresponde determinar si en el caso bajo estudio resulta aplicable retroactivamente aquella norma, conforme el principio de la ley penal más benigna.

En tal sentido, cabe recordar que en el derecho penal, al igual que en el derecho común (artículo 3 del Código Civil), las leyes se aplican para el futuro, por lo que la ley penal sólo rige para los hechos cometidos a partir del momento de su entrada en vigor y hasta su derogación. Ello, dado que la garantía contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional exige como principio general que la ley penal sea anterior al hecho imputado. Sin embargo, ese principio reconoce una excepción, prevista en el artículo 2 del Código Penal, que dispone la retroactividad de la ley más benigna y goza de jerarquía constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 -inciso 22, párrafo 2- de la Constitución Nacional (artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- y artículo 15 -inciso 1- del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En ese marco, cabe destacar que las sumas presuntamente evadidas en:

a) los períodos **3/2016** a **5/2016**, **7/2016** a **11/2016** y **1/2017** a **5/2017**, no alcanzan el monto mínimo establecido para encuadrar en los tipos penales agravados (artículo 6 -incisos a y b- del Régimen Penal Tributario, según Ley 27.799); y

b) los períodos **12/2015**, **6/2016**, **12/2016** y **6/2017** a **12/2018**, no alcanzan el monto mínimo establecido para encuadrar en el tipo penal de evasión previsional agravada por el monto (artículo 6 -inciso a - del Régimen Penal Tributario, según Ley 27.799).





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

En consecuencia, conforme el principio de la ley penal más benigna, corresponde aplicar en forma retroactiva la Ley 27.799, a partir de lo cual resulta procedente calificar:

a) las conductas vinculadas a los períodos **3/2016 a 5/2016**, **7/2016 a 11/2016** y **1/2017 a 5/2017**, como constitutivas del delito de evasión previsional simple, previsto en el artículo 5 del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799); y

b) las conductas vinculadas a los períodos **12/2015**, **6/2016**, **12/2016** y **6/2017 a 12/2018**, como constitutivas del delito de evasión previsional agravada por interpósita persona, previsto en el artículo 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799).

III.- Materialidad

8º) Que, expuestos los antecedentes del caso, el objeto procesal y la calificación legal aplicable, corresponde adentrarnos en la materialidad de los hechos.

En ese orden, las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la presente, así como también por el fisco nacional en el ámbito administrativo, indican que **DIA ARGENTINA S.A.**:

a) fue formalmente constituida el 13/7/1995 -bajo su anterior denominación “DESPENSAS SUDAMERICANAS S.A.”- e inscripta en la Inspección General de Justicia el 18/9/1995, bajo el N° 8587 del libro 117, tomo A, de Sociedades Anónimas, habiendo inscripto el cambio de denominación a **DIA ARGENTINA S.A.** el 30/8/1996 (cfr. poder obrante a fs. 1232/1235);

b) fue inscripta como contribuyente ante la ex A.F.I.P. el 27/10/1995, bajo la C.U.I.T. N° 30-68584975-1, registrándose como empleadora el 1/10/1995 y estando activa en la época de los hechos investigados (cfr. documentación reservada en Secretaría, detallada en el acta indagatoria como “-CAJA 3: *Día Argentina S.A./Anexo III consistente en: impresión de pantalla del Sistema Registral A.F.I.P. respecto de Día Argentina S.A. en 2 fs.-*”);

c) registra como actividad ante el fisco nacional la “venta al por menor de productos alimenticios N.C.P., en comercios especializados” -código 472190- (cfr. ídem);

d) durante la época de los hechos, declaró domicilio fiscal en Avenida Rivadavia N° 8875, piso 1, C.A.B.A. (cfr. ídem);

e) cierra sus ejercicios comerciales en el mes de diciembre de cada año (cfr. ídem);

f) en cuanto a su conducta como empleadora y respecto de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, habría presentado en término las declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social (mediante la presentación del Formulario F931) correspondiente a los períodos 1/2014 a 12/2018 (dentro de los que se encuentran los períodos objeto de análisis: **12/2015** y **3/2016 a 12/2018**);

g) no obstante lo expuesto en el punto anterior, no incluyó en las declaraciones juradas F931 los aportes y contribuciones de la Seguridad Social de los 13.690 trabajadores ajustados en el marco de la Orden de Intervención N° 1770079, tanto de los 993 “franquiados”





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

como de los 12.697 trabajadores que se encontraban en lo formal registrados por estos como sus dependientes, en carácter de empleadora directo de aquellos; y

h) en función de ello, **DIA ARGENTINA S.A.** habría evadido presuntamente, en cada uno de los períodos involucrados (**12/2015 y 3/2016 a 12/2018**), los montos que surgen del considerando 6°.

9°) Que, dicho lo anterior, cabe remarcar que las presuntas evasiones previsionales denunciadas por la ex A.F.I.P. se sustentan, entre otros elementos, en las pruebas obtenidas con motivo de la fiscalización realizada a la contribuyente **DIA ARGENTINA S.A.**, la cual tramitó bajo la Orden de Intervención N° 1770079 (cfr. actuaciones reservadas, aportadas por el fisco nacional el 5/3/2024, mediante el escrito identificado en el Sistema Lex 100 como “ESCRITO AFIP REMITE INFORME ARTÍCULO 18”).

Dicha fiscalización se deriva de las pesquisas llevadas a cabo por la División Investigación de la Dirección Regional de los Recursos de la Seguridad Social - Grandes Empleadores, cuya intervención fue impulsada originariamente a partir de un requerimiento librado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 10, en el marco de la causa N° 226/2015.

De modo complementario, se incorporó a la Orden de Intervención documentación remitida por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 1, que fuera aportada por la defensa técnica **DIA ARGENTINA S.A.**, con el objeto de que la ex A.F.I.P. procediera a su análisis y elaborara el informe técnico pertinente.

Sobre la base de dichas premisas y del examen documental efectuado, la citada División Investigaciones elaboró su Informe Final (cfr. escritos identificados en el Sistema Lex100 como “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 1 [08/04/2021 18:49]”, “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 2 [08/04/2021 18:49]”, “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 3 [08/04/2021 18:49]”, “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 4 [08/04/2021 18:49]”, “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 5 [08/04/2021 18:49]”, “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 6 [08/04/2021 18:49]” y “09/04/2021 - INFORME FINAL DE INSPECCION - PARTE 7 [08/04/2021 18:49]”), en el cual, tras realizar una pormenorizada evaluación de los instrumentos aportados, el área técnica advirtió que la suscripción de los mentados “contratos de franquicia” entre la empresa **DIA ARGENTINA S.A.** y las personas físicas alcanzadas por la determinación de deuda, evidenciaría una palmaria ausencia de los elementos constitutivos propios de un vínculo comercial y autónomo. Por el contrario, la fiscalización determinó que el esquema analizado traslucía las características inconfundibles de una relación laboral de dependencia encubierta, en la cual quien detentaba el ropaje formal de “franquiciante” ejercía el control, impartía directivas y establecía condiciones de ejecución estrictamente reservadas a la figura del empleador.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Así, la hipótesis central de la fiscalización determinó que la contribuyente implementó una maniobra fraudulenta basada en la simulación de contratos de franquicia, concesión y consignación, con el único fin de interponer a terceros insolventes para ocultar su rol como verdadero empleador, en clara infracción a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. A los fines de acreditar materialmente dicha maniobra, el fisco nacional desplegó amplias tareas de fiscalización, efectuando en primer término tareas periféricas y de campo en la sede central de la contribuyente para obtener los datos respecto a la modalidad y condiciones para acceder a una franquicia. Como derivación de este análisis, y a partir del entrecruzamiento de las direcciones IP utilizadas por numerosos franquiciados para la presentación de los formularios F931, se comprobó una coincidencia de estudios jurídico-contables (tales como “Gatto Zenobi & Asociados” y “Estudio Miramonte y Asociados”), ratificando la presunción de que la contratación de dichos profesionales era una imposición ineludible de **DIA ARGENTINA S.A.** para mantener el control sobre la liquidación de las obligaciones formales. En el mismo sentido, el organismo recaudador analizó el contenido de la página web oficial de la firma, relevando un total de 654 sucursales activas; sobre este universo se tomó una muestra representativa de 35 casos, detectando que en 20 de ellos el domicilio fiscal del supuesto franquiciado independiente coincidía de manera exacta con el domicilio de las sucursales declaradas por **DIA ARGENTINA S.A.** ante la ex A.F.I.P., constatando además que muchos de los actuales franquiciados revestían, con carácter previo, la condición de empleados en relación de dependencia directa de la empresa matriz.

Avanzando sobre el plano jurídico-laboral, la fiscalización efectuó un relevamiento sistemático en sus bases de datos respecto de los telegramas remitidos en los términos de la Ley 25.345, los que dieron cuenta de denuncias de empleados directos, empleados de franquiciados y de los propios franquiciados que reclaman se regularice su situación laboral considerando su relación dependiente. A modo de corroboración, el ente recaudador relevó la existencia de 137 causas incoadas contra la compañía en el fuero nacional del trabajo, de cuyo escrutinio se desprende que la inmensa mayoría concluyó mediante acuerdos conciliatorios en los cuales **DIA ARGENTINA S.A.** asumió íntegramente la carga indemnizatoria. Adicionalmente, se analizaron sentencias laborales definitivas y firmes (casos “Guzzi”, “Morel Flecha”, “Duarte”, “Marianetti”, “Vallejos Torres”, “Tunes” y “Salomón”, entre otros) en las cuales los magistrados laborales declararon la nulidad de los contratos de franquicia por constituir un fraude a la ley, condenando a **DIA ARGENTINA S.A.** como empleadora directa tras comprobar que la firma se beneficiaba en forma permanente de la prestación de los trabajadores y mantenía el carácter de explotadora real de los establecimientos.

Por otra parte, la investigación se nutrió de la interceptación de las comunicaciones telefónicas producidas por el Departamento Delitos Federales de la P.F.A. La desgrabación de estas diligencias permitió observar a referentes de la empresa instruyendo a futuros “socios”, induciéndolos a presentar garantías e instándolos a realizar entrevistas con el





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

departamento de Recursos Humanos de **DIA ARGENTINA S.A.**, quien se encargaba de seleccionar y capacitar tanto a los titulares de las tiendas como a su personal de confianza (denominado “mano derecha”), operando en la práctica como si se tratara de empleados de la propia compañía. En la misma línea probatoria, se procedió al análisis integral de diversos soportes informáticos y aproximadamente 20.000 correos electrónicos pertenecientes a los responsables gerenciales de expansión comercial y la revisión de los archivos del sistema personal de un agente interno de la firma (Rodrigo Javier). De estos registros se obtuvieron los legajos de los “socios estratégicos” e informes socioambientales, surgiendo que la empresa reclutaba a personas que carecían de experiencia previa en el rubro y que presentaban un nivel socioeconómico de clase media o media baja, incompatible con la solvencia requerida para afrontar un emprendimiento comercial de tal envergadura. El fisco indicó que la empresa disponía unilateralmente el traslado de personal entre distintas franquicias (como en el caso de la firma INTERSUPER S.A.), decidía los despidos de trabajadores, organizaba cierres nocturnos por bajos rendimientos sin el consentimiento del titular, y resolvía el cierre definitivo de las tiendas de acuerdo a sus propios objetivos de ventas.

Para robustecer dicho cuadro probatorio, el organismo recaudador efectuó decenas de declaraciones testimoniales, las cuales resultaron contestes al describir una operatoria uniforme en la cual fueron captados y obligados a asumir el rol de empleadores careciendo de todo riesgo empresario real. Los declarantes manifestaron que no tenían la posibilidad de elegir la tienda a explotar ni de decidir qué productos comercializar, y que la empresa les imponía la contratación de estudios contables específicos y la dotación de personal necesaria.

Asimismo, en lo atinente a la ingeniería contractual, la inspección analizó los “contratos tipo” y detectó que la autonomía de los franquiciados era prácticamente nula en la gestión operativa, financiera y material:

- **DIA ARGENTINA S.A.** mantenía la titularidad de los contratos de alquiler de los inmuebles -en la Provincia de Buenos Aires mediante la firma controlada **PROMOACTIVA S.A.**- y de las habilitaciones municipales;

- los controladores fiscales y las terminales de pago electrónico operaban a nombre de **DIA ARGENTINA S.A.**, los ingresos por tarjetas se acreditaban directamente en las cuentas de la mandante, y la recaudación en efectivo era retirada por empresas transportadoras de caudales contratadas de forma exclusiva por la sede central; y

- los supervisores de la compañía poseían un acceso especial al sistema informático denominado “llave 4”, mediante el cual podían modificar unilateralmente el stock y los precios, tornando materialmente imposible que el franquiciado controlara de forma independiente sus inventarios y generando liquidaciones mensuales con saldo negativo que los obligaban a solicitar adelantos para abonar salarios.

A su vez, la fiscalización analizó las auditorías externas mensuales elaboradas por la empresa “CONA”, las cuales revelaron que **DIA ARGENTINA S.A.** auditaba mes a mes las





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

irregularidades registrales de sus sucursales tercerizadas, detectando patrones sistemáticos de precarización laboral como el pago de conceptos no remunerativos, remuneraciones inferiores al convenio de comercio y la declaración de jornadas de medio tiempo para empleados que cumplían jornadas completas. Además, ante la desvinculación de un titular, la compañía asumía como propias las liquidaciones finales del personal (como en el acta de Hernán Olivera) y utilizaba las garantías hipotecarias y los pagarés firmados en blanco como una herramienta de negociación para forzar a los terceros a renunciar a los reclamos por fraude laboral.

Como corolario, el fisco determinó que esta estructuración artificiosa le permitió a la contribuyente atomizar su nómina salarial y obtener un provecho tributario ilícito.

El ajuste final arrojó una evasión de aportes y contribuciones por los períodos 1/2014 a 12/2018 que asciende a la suma de \$ 808.331.036,85 en concepto de capital histórico, el cual sumado a intereses y multas alcanzó un perjuicio económico total reclamado de \$ 3.783.422.762,35, encontrándose dentro de dicho ajuste los hechos correspondientes a los períodos **12/2015** y **3/2016** a **12/2018**, que en la actualidad conforman el objeto procesal del expediente.

Finalmente, cabe destacar que, entre las diligencias practicadas, se examinaron exhaustivamente los sistemas informáticos propios de la ex A.F.I.P. (cruce de más de 500.000 registros), detectando un uso abusivo y distorsionado de los contratos de pasantías previstos por la Ley N° 26.427, superando los cupos máximos permitidos y los plazos legales de contratación. Respecto a esta maniobra, corresponde recordar que el fisco nacional solo efectuó ajustes en los períodos 10/2014 a 2/2015, motivo por el cual no se profundizará en su análisis, en función de que respecto a esos hechos se dictó un sobreseimiento en el marco del Incidente de Extinción de la Acción Penal N° **CPE 1460/2018/15**, por aplicación del principio de la ley penal más benigna.

IV.- Aspecto objetivo del tipo

10º) Que, previo a adentrarse en el análisis de los ajustes practicados por la ex A.F.I.P. en relación con **DIA ARGENTINA S.A.**, resulta ilustrativo exponer ciertas cuestiones relativas a la normativa de orden público laboral y al régimen de franquicias, cuya trascendencia es fundamental para determinar si, en el presente caso, se constata una genuina independencia entre la figura del franquiciante y la del franquiciado.

En tal sentido, la controversia principal en las presentes actuaciones radica en dilucidar la verdadera naturaleza jurídica de las prestaciones que vinculaban a las partes. Específicamente, corresponde determinar si los sujetos presentados formalmente como “franquiciados” -y, por consiguiente, el personal bajo su aparente dependencia- ejercían su actividad de manera verdaderamente autónoma y comercial, o si, por el contrario, nos encontramos frente a una estructura empresarial en la cual dicha figura contractual funcionó como un mero ropaje formal para encubrir una relación de empleo directo con la firma central. A fin de desentrañar esta cuestión, resulta imperativo examinar exhaustivamente las circunstancias





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

fácticas del caso a la luz de los elementos tipificantes que distinguen el trabajo autónomo de la subordinación laboral.

A tales fines, es menester establecer la línea divisoria conceptual entre ambas figuras. El rasgo distintivo e ineludible de la autonomía radica en la asunción personal de los riesgos económicos inherentes a la actividad. El trabajador verdaderamente autónomo organiza su propia empresa, determina libremente sus objetivos y los medios instrumentales para alcanzarlos, sin estar sometido a directivas foráneas. En consecuencia, es quien soporta las eventuales pérdidas y hace propios los beneficios de su labor, operando fuera de cualquier inserción en una estructura económica ajena.

En franca contraposición, la nota esencial que define la relación de dependencia es, precisamente, la inserción del trabajador en un esquema organizativo ajeno. En este marco legal, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (que se encontraba vigente al momento de los hechos), el riesgo de la explotación recae de manera exclusiva sobre el empleador, mientras que el trabajador se limita a poner a disposición su fuerza laboral a cambio de una contraprestación remunerativa garantizada. Esta dependencia se exterioriza de manera ostensible a través de la subordinación en su triple dimensión: jurídica, técnica y económica.

En lo que respecta a estas dimensiones, la subordinación jurídica se cristaliza en la potestad jerárquica del empleador para impartir directivas, órdenes e instrucciones, frente al deber de acatamiento del empleado. La subordinación técnica se materializa en la facultad patronal de fijar las normas, modos y métodos específicos de ejecución de las tareas. Finalmente, la subordinación económica se constata ante la total ajenidad del trabajador respecto del riesgo comercial de la empresa. La concurrencia de estos factores, o la mera constatación material de la prestación de un servicio, activa la presunción legal ineludible de la existencia de un contrato de trabajo, tal como lo estatuye el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (vigente al momento de los hechos), que establecía: *“El hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que, por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven, se demostrase lo contrario. La presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando mediaren contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios, o cualquier otra modalidad que comprendan prestaciones de servicios sin relación de dependencia, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación o el pago se realice conforme los sistemas bancarios y/u otros sistemas que determine la Reglamentación correspondiente. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a la seguridad social”*, y en materia previsional, el artículo 4 de la Ley N° 26.063, que establece: *“En materia de Seguridad Social, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la prestación personal que se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por las partes”*.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Sobre ello, resulta claro lo expuesto por la doctrina en cuanto a que: “...*En nuestro ordenamiento laboral encontramos dos conceptos bien diferenciados: ‘trabajador dependiente’ y ‘trabajador autónomo’. La interpretación armónica de las leyes laborales y de previsión social, así como de los reglamentos y disposiciones dictados en su consecuencia, nos revelan conceptualmente los elementos que califican como dependiente a un trabajador. Ellos son, en líneas generales, la subordinación respecto del dador de trabajo -que se observa en cuestiones jurídicas, técnicas y económicas-, además de la inserción del trabajador en una estructura organizativa que le es ajena. Esto significa que el trabajador dependiente desarrolla su actividad en la empresa de un tercero y, en tal contexto, está sometido a directivas del empleador (subordinación jurídica); a normas, modos y métodos de trabajo (subordinación técnica), y percibe una remuneración a cambio de su trabajo personal (subordinación económica). Por ello, el trabajador no determina objetivos organizacionales ni medios para su logro, y no se encuentra alcanzado por los resultados de la empresa, sino que pone su ‘fuerza laboral’ a disposición del empleador. En cambio, el trabajador autónomo se caracteriza por la asunción de riesgos en la relación ganancias-pérdidas, y por la organización por cuenta propia de su trabajo. Así, el trabajador independiente asume los riesgos económicos propios del ejercicio de su actividad, beneficiándose de las ganancias de su trabajo, pero soportando las pérdidas; organizando él mismo la actividad, al definir los objetivos de su trabajo y los medios para su logro. Con estos conceptos, es claro que -por ejemplo- el trabajador a cargo de la ‘atención al público’ en el comercio de un tercero es ‘dependiente’ y que ese tercero dador de trabajo es ‘autónomo’*” (Emlek, Pablo L., “La autonomía dependiente en los recursos de la seguridad social”, Publicado en: IMP - Práctica Profesional 2022-CXXXIV, 109, Cita: TR LALEY AR/DOC/3065/2022).

Por su parte, frente a la hipótesis del trabajo dependiente, se erige la defensa basada en la existencia de un contrato de franquicia. Esta figura, con actual consagración normativa en los artículos 1512 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, ampara la cesión de un sistema probado y una marca comercial a cambio de una prestación. En tal sentido, el mencionado artículo dispone: “*Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado*”.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

No obstante, el andamiaje legal exige como requisito constitutivo e indispensable la estricta autonomía e independencia jurídica entre franquiciante y franquiciado. De hecho, el artículo 1520 del citado ordenamiento expresamente dispone que no existe relación laboral entre las partes, ni entre el franquiciante y los dependientes del franquiciado, salvo que se corrobore la existencia de fraude laboral. Por ende, la validez oponible de este esquema comercial exige que el franquiciado detente capital propio, asuma un riesgo genuino, exhiba una funcionalidad individual distinguible y carezca de injerencia directa por parte de la empresa matriz en su organización.

Una vez verificada la verdadera existencia del vínculo dependiente y determinado quién reviste materialmente el rol de empleador, recaen sobre este último las ineludibles obligaciones del Sistema Único de la Seguridad Social. Conforme a las Leyes Nros. 18.820, 24.241 y 26.063, pesa sobre el dador de trabajo la carga pública de registrar debidamente a su personal, oficiar como agente de retención y abonar los aportes y contribuciones mediante las respectivas declaraciones juradas. La presentación de declaraciones inexactas o la instrumentación de figuras artificiosas destinadas a evadir dichas obligaciones, habilita indefectiblemente al organismo recaudador a proceder a la determinación de oficio de la deuda.

Sentado el marco normativo precedente, corresponde proyectar estos lineamientos al supuesto bajo examen. En autos, se le imputa a la firma **DIA ARGENTINA S.A.** el carácter de empleadora directa de un universo de trabajadores en los períodos **12/2015** y **3/2016** a **12/2018** (compuesto por presuntos franquiciados y dependientes de estos), escenario en el cual cobra gravitante operatividad el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (vigente al momento de los hechos), el cual dispone que todo trabajador contratado por terceros para ser proporcionado a una empresa, será considerado empleado directo de quien efectivamente utiliza su prestación.

En corolario, el análisis probatorio a desarrollarse a continuación tendrá por objeto primordial merituar si la utilización de los mentados contratos de franquicia careció de la autonomía y el riesgo empresario que exige la ley civil, operando en la realidad material como un ardid ilícito y fraudulento. Ello, con el fin de establecer si dicha operatoria tuvo como fin encubrir una organización sujeta a las directivas de la imputada para evadir el pago de aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social.

11º) Que, expuestas las circunstancias acreditadas en el expediente, corresponde establecer su incidencia y proyección desde la óptica jurídico penal, a los fines de determinar si los hechos investigados en autos resultan constitutivos de los delitos de evasión previsional simple (períodos **3/2016** a **5/2016**, **7/2016** a **11/2016** y **1/2017** a **5/2017**) y evasión previsional agravada por interpósita persona (períodos **12/2015**, **6/2016**, **12/2016** y **6/2017** a **12/2018**), previstos respectivamente en los artículos 5 y 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799).





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Resulta menester señalar que el delito de evasión (previsional o tributaria) consiste en la acción u omisión deliberada de un obligado, quien mediante la utilización de medios engañosos o ardidosos procura disimular u ocultar su real capacidad contributiva, con el preciso objetivo de evitar el pago íntegro de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, sea como responsable a título propio o por deuda ajena (en ese sentido se han expresado, BERTAZZA, Humberto J. y MARCONI Norberto J. en “El Delito de Evasión Tributaria”, Capítulo 2, Tratado del Régimen Penal Tributario, Tomo I, Editorial La Ley, 2010, pág. 279 o RIQUERT, Marcelo en “REGIMEN PENAL TRIBUTARIO Y PREVISIONAL- LEY 27.430. COMENTADA. ANOTADA”, editorial Hammurabi, 1° edición, página 105).

Tanto en su forma comisiva como en su modalidad omisiva, sólo encuadran en el tipo penal las conductas que efectivamente atenten gravemente contra el bien jurídico protegido. De ahí deriva que no debe tratarse de simples maniobras o mentiras tendientes a dificultar el control fiscalizador, sino de acciones u omisiones en las cuales la maniobra utilizada vaya acompañada de un elemento adicional, esto es, el ardid o engaño (BORINSKY, Mariano Hernán, GALVÁN GREENWAY, Juan Pedro, LÓPEZ BISCAYART, Javier y TURANO, Pablo Nicolás, “Régimen Penal Tributario y Previsional. Ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735”, Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, primera edición, 2012, pág. 65).

Al respecto, se ha dicho que “...*El requisito del ardid apunta a deslindar la evasión del simple incumplimiento de una obligación; si no se exigiera la presencia de una conducta maliciosa, se consagraría lisa y llanamente la prisión por deudas. El ardid es un presupuesto inexorable, que legitima la imposición de una sanción. No es, pues, un medio para lograr la evasión, sino un medio para mantenerla oculta. Ninguno de los medios comisivos utilizados configura de por sí el ilícito si no trae como consecuencia el ocultamiento de la situación económica o patrimonial...*” (MACCHI, Miguel Ángel, “Sistema penal tributario y de la seguridad social”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, pág. 156).

Debe destacarse que para el supuesto en el cual se verifique interposición de personas y una suma evadida superior a los \$ 14.000.000 por cada período mensual, el Régimen Penal Tributario estableció una figura agravada (artículo 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario, según Ley 27.799).

Con relación a esta figura agravada del delito de evasión se ha dicho que “...*la principal razón del aumento de pena de esta figura radica en el perjuicio derivado de este tipo de conductas para la relación jurídica tributaria verificado no sólo por la conducta ardidosa o engañosa que se traduce en la concreta evasión de los tributos debidos por un monto superior al fijado por esta figura, sino también y en especial por la afectación del normal desarrollo de las funciones de control por parte del organismo recaudador, como consecuencia de la utilización de personas interpuestas que dificultan identificar el verdadero obligado de esa relación jurídica y autor de la conducta fraudulenta*” (DE LLANO, Hernán, “Agravantes de la Evasión





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Tributaria. Modalidades comunes en la interposición de personas”, en Capítulo II, Derecho Penal Tributario, Tomo II, Editorial Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, pág. 735 vta.).

Asimismo, respecto a la persona interpuesta se sostuvo que “...*la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia especializada considera que no es determinante para la aplicación de esta agravante que el testaferro actúe con conocimiento y voluntad de realización del tipo objetivo...actúe con dolo o lo haga como un mero instrumento del hombre de atrás, lo esencial a los fines de la subsunción típica en los términos del inciso b) del art. 2.º será el actuar doloso de este último valiéndose de esa persona interpuesta*” (idem, pág. 741 vta.).

12º) Que, en cuanto a los elementos requeridos por el aspecto objetivo del tipo penal contemplado en los artículos 5 y 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario, surge de la prueba analizada que **DIA ARGENTINA S.A.** declaró ante el fisco nacional como actividad la “venta al por menor de productos alimenticios N.C.P., en comercios especializados” y presentó en término las declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social (mediante la presentación del Formulario F931) correspondiente a los períodos **12/2015** y **3/2016 a 12/2018**, sin incluir en aquéllas los aportes y contribuciones de la Seguridad Social de los trabajadores ajustados en el marco de la Orden de Intervención N° 1770079, tanto de los “franquiados” como de los trabajadores que se encontraban en lo formal registrados por estos como sus dependientes, en carácter de empleador directo de aquellos.

En ese orden, al momento de los hechos, la firma imputada revestía la calidad de sujeto obligado al pago de los aportes y contribuciones del Sistema de la Seguridad Social, en virtud de la calidad de empleador que revestía (cfr. lo dispuesto por el artículo 26 y concordantes de la Ley 20.744, vigente al momento de los hechos).

Por otro lado, cabe señalar que el artículo 12 de la Ley 24.241 impone a los empleadores, entre otras obligaciones: **1)** practicar en las remuneraciones los descuentos correspondientes a los aportes personales y depositarlos en orden al Sistema Único de la Seguridad Social; **2)** depositar en la misma forma indicada las contribuciones a su cargo; y **3)** dar cumplimiento en tiempo y forma a las demás disposiciones que la presente ley establece, o que la autoridad de aplicación disponga.

También, en la referida ley se dispone que los aportes y contribuciones obligatorios serán ingresados a través del Sistema Único de la Seguridad Social y que, a tal efecto, los mismos deberán ser declarados e ingresados por el trabajador autónomo o por el empleador en su doble carácter de agente de retención de las obligaciones a cargo de los trabajadores y de contribuyente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, según corresponda, en los plazos y con las modalidades que establezca la autoridad de aplicación (artículo 11).

Además, se establece que los aportes y contribuciones obligatorios al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se calcularán tomando como base las remuneraciones y rentas de referencia, las cuales son definidas en la misma ley (artículos 6, 7, 8, 10 y concordantes





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

de la citada ley). Por otra parte, a través de las leyes Nros. 24.241, 19.032, 24.013, 24.714, 23.660, 23.661 y demás normas complementarias y modificatorias, se establecieron los porcentajes relativos a los aportes y contribuciones a la seguridad social que deben afrontar, según corresponda, los empleados y los empleadores. Por último, mediante el artículo 2 de la Ley 26.063 se estableció que *“La determinación de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social se efectúa mediante declaración jurada del empleador o responsable, de conformidad con el artículo 11 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, conservando los efectos de las obligaciones que emanan del artículo 13 de dicha ley...”*.

En ese contexto, de la normativa citada se desprende que, al igual que en el sistema tributario, en materia de seguridad social rige el principio de la autodeterminación, recayendo en cabeza de los empleadores o responsables el deber de presentar de manera oportuna y veraz las declaraciones juradas en cuestión.

Debe destacarse que la declaración jurada de la Seguridad Social es informativa y la eficacia de la misma dependerá de los medios de prueba que confirmen la veracidad de los datos volcados en aquélla. Dicha declaración jurada está dirigida principalmente al fisco nacional, quien puede verificarla y establecer su correspondencia con la situación de hecho que constituye el supuesto de la obligación; lo cual se lleva a la práctica a través del denominado proceso de fiscalización.

Así como está concebido, nuestro sistema de recaudación de la Seguridad Social (al igual que el sistema tributario) reposa sobre la confianza de la información que los empleadores suministren a la administración, en primer término, mediante sus declaraciones juradas.

En esa línea, la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico sostuvo que *“...de conformidad con lo establecido por los art. 21 del decreto del P.E.N. N° 507/93 y 11 de la ley 24.241, la determinación y la percepción de los recursos de la seguridad social relacionados con los trabajadores en relación de dependencia se efectúa sobre la base de las declaraciones juradas que deben presentar los empleadores, y aquéllos tienen la obligación de consignar los datos correctos y completos para la determinación de tales recursos.*

En efecto, los datos necesarios para la determinación de los recursos de la seguridad social correspondiente a los trabajadores en relación de dependencia son, entre otros, aquéllos que se relacionan con la cantidad de empleados que registra cada empleador y con la remuneración que se paga a cada uno de aquéllos. Estos datos, en principio, son desconocidos por el organismo recaudador. Por lo tanto, por la ley 24.241 se establece que aquéllos deben ser declarados por el empleador, en el doble carácter de agente de retención de las obligaciones a cargo de los trabajadores y de contribuyente al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (confr. art. 11 de la ley 24.241).





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

De modo que ‘...la declaración por [el] sujeto pasivo o declaración jurada tiene el carácter de norma general en nuestro sistema legal tributario vigente...’ y por aquella declaración se ‘...lo responsabiliza por sus constancias, sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la Administración Pública...’ (confr. VILLEGAS, Héctor B., ‘Curso de finanzas, derecho financiero y tributario’, Astrea, 8° edición, Buenos Aires, 2002, págs. 401 y 403; y, entre muchos otros, Reg. N° 37/06; CPE 1841/2013/CA5, res. del 2/11/2018, Reg. Interno N° 951/2018, CPE 1529/2017/2/CA2, res. del 22/10/19, Reg. Interno N° 825/19; CPE 1117/2017/3/CA3, res. del 15/11/2019, Reg. Interno 925/19; CPE 1619/2016/2/CA3, res. del 29/07/2020 y CPE 1973/2018/5/CA1, res. del 22/04/21, Reg. Interno N° 233/21 de la Sala “B” de este Tribunal y CPE 1068/2019/CA1, res. del 9/06/2020, Reg. Interno N° 152/2020 de la Sala ‘A’ de este Tribunal), concepto aplicable plenamente al sistema legal vigente de la seguridad social” (cfr. C.N.A.P.E., Sala “B”, Causa N° CPE 675/2020/2, Orden N° 30.915, Resolución del 2/2/2023).

Además, debe remarcarse que la A.R.C.A. posee una capacidad limitada de control sobre todo el universo de contribuyentes. En consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones de la Seguridad Social mediante la presentación de declaraciones juradas falaces u omisiones maliciosas, no sólo genera un perjuicio en las arcas de dicho sistema, sino que, además, le dificulta su detección.

Al respecto, la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ha dicho, en un caso de evasión previsional, que “...como ha establecido este Tribunal en numerosas oportunidades, con un criterio que ‘mutatis mutandi’ resulta aplicable en autos, ‘...en un sistema en el cual la autodeterminación tributaria es el principio general, la presentación de declaraciones juradas por las cuales se declaren datos falsos...podrían constituir, en principio, un ardid idóneo a fin de engañar al organismo recaudador, ocultando la realidad económica del contribuyente y la obligación de aquél de tributar (confr. Regs. Nos. 407/05, 240/06, 962/06, 361/07, 48/09, 260/13; CPE 1012/2013/1/CA1, res. del 14/2/2014, Reg. S.I.G.J. N° 17/14; CPE 998/2008/4/CA1, res. del 8/5/2014, Reg. S.I.G.J. N° 130/14; CPE 913/2014/CA1, res. del 18/2/2015, Registro Interno N° 36/15; CPE 1123/2007/CA1, res. del 18/11/2015, Reg. Interno N° 568/15; CPE 679/2013/5/CA3, res. del 14/12/2016, Reg. Interno N° 756/16...’ (conf. CPE 1529/2017/2/CA2, res. del 22/10/2019, Reg. Interno N° 825/19; entre otros, de esta Sala ‘B’)” (cfr. ídem).

13°) Que, sentado lo expuesto, este juzgado entiende que se encuentra acreditado, con el alcance exigido para esta etapa procesal, que **DIA ARGENTINA S.A.** omitió la registración de trabajadores que figuraban formalmente como franquiciados y empleados inscriptos bajo la dependencia de estos últimos, a efectos de evadir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, lo cual fue perpetrado mediante el uso abusivo de la figura del contrato de franquicia comercial, regulada en el artículo 1512 del Código Civil y Comercial de la Nación.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

En consonancia con lo sostenido por el Organismo Recaudador y el Ministerio Público Fiscal, se advierte que dicha figura jurídica fue utilizada con el deliberado propósito de encubrir verdaderas relaciones de dependencia directa, resultando de plena aplicación al caso el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo (vigente al momento de los hechos), puesto que los supuestos franquiciados habrían operado como meras personas interpuestas.

A los fines de desentrañar la maniobra investigada, corresponde detallar cómo la firma imputada operó en todo momento como el verdadero y único empleador, demostrando palmariamente la total ausencia de riesgo empresario y subordinación económica por parte de los franquiciados.

El ente fiscalizador constató que estos sujetos no debían efectuar inversión inicial monetaria alguna para acceder a la franquicia, limitándose a la suscripción de pagarés o la constitución de garantías que en la práctica rara vez se ejecutaban. Al respecto, resulta relevante destacar lo expuesto en el informe final de fiscalización sobre el análisis de los contratos de franquicia: *“Contratos de franquicia/concesión/consignación/aprovisionamiento: Con la documental proporcionada por el contribuyente en sede judicial, se confeccionó una planilla con el detalle de los contratos, identificando tienda. Apellido y Nombre del Franquiciado/Consignatario/Concesionario y el período de duración de dichos contratos, garantías, pagarés. Ver DVD a fojas 3208.*

En base a la lectura de estos instrumentos se puede definir que se trata de ‘contratos tipo’ en los cuales se repiten cada una de las cláusulas, estipulando las obligaciones que contraen cada una de las partes involucradas. A continuación, se mencionan aquellas que, a criterio de los actuantes, resultan llamativas en un supuesto ‘contrato de franquicia’

- ***Día es el titular del alquiler del establecimiento. La habilitación municipal es obtenida también por Día Argentina S.A, quien además se encarga de abonar la luz, el gas, etc.***

- ***El objetivo principal del contrato es la ‘operación del establecimiento’ por parte del franquiciado.***

- ***Queda entendido y convenido que el franquiciado no adquiere ningún derecho de locación, comodato, negociación, cesión o disposición de cualquier parte o espacio del establecimiento.***

- ***El franquiciado se obliga a utilizar para el ejercicio de las funciones a su cargo contempladas en el contrato las únicas cajas registradoras y el software que le fuere provisto por el franquiciante.***

- ***Al término del horario de atención al público, luego del cierre de las TPV's (cajas registradoras), el franquiciado se obliga a transmitir diariamente al franquiciante una relación detallada de la facturación resultante de las operaciones efectuadas a través de las TPV's, utilizando a tal fin la línea de transmisión de datos instalada por el franquiciante en el establecimiento.***





• ***Día conservará durante toda la vigencia del contrato un sector dentro del local en el que funciona el establecimiento. Este sector será afectado por Día a la instalación de un escritorio, un archivo y otras facilidades a fin de que su personal pueda ejercer con la suficiente eficacia e inmediatez las facultades de contralor que se reservan a favor de Día en el contrato. A estos fines Día, mantiene y mantendrá en forma ininterrumpida, por sí y por medio del personal que designare a esos efectos: (i) la tenencia del sector antedicho; (ii) el acceso directo, libre, pleno, irrestricto y permanente a él; (iii) un juego de llave de todas las puertas de acceso al local; y (iv) el control sobre la clave de la alarma.***

• *Queda expresamente convenido que todos los productos entregados en el establecimiento continuarán siendo exclusiva propiedad del franquiciante*

• ***El franquiciado percibirá del franquiciante un canon por la operación del establecimiento que resultará de la aplicación de la fórmula y demás indicaciones en el Anexo II (5%).***

• *Entre otras, resulta de interés el detalle que se efectúa en el Anexo X - 'Manual de mantenimiento ordinario', en el mismo se instruye como identificar problemas eléctricos y las posibles soluciones a cada uno. Desagües de murales (Lácteos y carnes), se establecen los cuidados que se deben llevar a cabo, las tareas y en los tiempos que corresponde efectuarlas. Otro tipo de cuidados relacionados con el mantenimiento de cortinas, barandas metálicas, montacargas, etc.*

• ***Respecto de la cerrajería, se establece un manejo operativo de las llaves: 'El Responsable de la Tienda debe tener separada la llave de la puerta de ingreso del personal y la de su caja fuerte, del resto de las llaves de la tienda, dado que son las únicas llaves que debe transportar fuera de la tienda. El manajo que queda en tienda deberá contener el resto de las llaves de las instalaciones interiores, tener en cuenta que NUNCA puede ir con este manajo, las llaves del buzón de retiradas y de caja fuerte de la empresa recaudadora porque en caso de pérdida se estaría ocasionando un gasto adicional innecesario y el trastorno que esto significa en la operatoria de la tienda. Mantener siempre bajo resguardo las llaves del buzón y de la caja fuerte del Transporte de Caudales' (el destacado corresponde a la presente).***

Además, el análisis de la prueba documental interna secuestrada, referida a los requisitos y competencias de los candidatos, reveló que la empresa no exigía solvencia patrimonial, admitiendo incluso el ingreso de personas con antecedentes financieros negativos, calificados en situación de riesgo alto o irrecuperable en los registros de antecedentes crediticios. Asimismo, quedó evidenciado un plan estratégico de expansión orientado a captar jubilados a través del PAMI, valorando su experiencia, su tiempo libre y la posibilidad de que aportaran garantías propietarias y familiares para operar los locales. A esto se suma la exclusión expresa de profesionales como abogados o contadores públicos en el perfil de búsqueda, denotando la intención de contratar sujetos que no pudieran comprender cabalmente la normativa aplicable a





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

la supuesta relación comercial, así como también directivas discriminatorias respecto de no seleccionar o desvincular a trabajadoras en estado de gravidez.

Sobre ello, resulta oportuno transcribir lo expuesto en el Dictámen Jurídico N° 95/2023 del 29/9/2023 sobre “...los documentos referidos a requisitos de ingreso y garantías, obtenidos en el marco de la causa penal de la PC de Rodrigo Javier (DVD de fs 3207 CP). Se analizan los mas relevantes al respecto, (los que se descargaron y agregaron al Papel de Trabajo N°6 obrante a fs. 5396/5420 CP) aclarando que ‘COFOs’, ‘FOFOs’ y ‘LLAMAs’ es como denomina la rubrada a sus diferentes ‘modelos de negocios’ (Concesión/franquicia):

• **‘REQUISITOS Y COMPETENCIAS DE CANDIDATOS LLAMAs y COFOs’:**
donde se detalla los **requisitos generales del ‘candidato’ y su mano derecha.**

‘Rango de edad (Aplica a Titular y Empleado Responsable- ‘Mano Derecha’) De 25 a 55 (se contemplará como ideal el rango de 30 a 50 años). Se debe tomar como pauta su correcto estado físico y mental según estudios que se realizan en el desarrollo del circuito de ingreso’. **Consignando, además, en dicho documento, ‘no Abogados ni CPN’ (Contador Público Nacional).**

‘Disponibilidad: (Aplica a Titular y Empleado Responsable - ‘Mano Derecha’) Disponibilidad full time y exclusiva al negocio desde el inicio de la capacitación. **Única fuente de sustento económico (preferentemente).**

‘Presencia (Aplica a Titular y Empleado Responsable - Mano Derecha’) Buena presencia y prolijidad acorde a los estándares de la Empresa’.

‘Competencias requeridas: Liderazgo (Se evalúa Comunicación; Orientación a resultados y Resolución de problemas); Tolerancia a la Presión; Adaptabilidad.

A su vez, se detallan los **tipos de garantías aceptadas, hipotecaria, prendaria, inmobiliaria, pagares.**

• **‘PROCESO DE INGRESO DE CANDIDATOS LLAMAs y COFOs’:** En este documento, que sirve como ‘guía de ingreso’, se consigna por ejemplo, en caso de que el informe de situación crediticia arroje situación 1 y 2 en Nosis ‘Ok’, en el caso de Situación 3, se solicita Garantía Real y en caso de situación 4 y 5, si es entre los meses 13 y 24, se solicita Garantía Real.

Al respecto cabe mencionar que el informe de Antecedentes financieros determina la situación en función de las siguientes pautas (<https://blog.nosis.com/consultar-situacion-crediticia-cuitcuil>)

Situación 1 | Situación normal: atraso en el pago que no supere los 31 días.

Situación 2 | Riesgo bajo: atraso en el pago de más de 31 días y hasta 90 días.

Situación 3 | Riesgo medio: atraso en el pago de más de 90 días y hasta 180 días.

Situación 4 | Riesgo alto: atraso en el pago de más de 180 días a un año.

Situación 5 | Irrecuperable: atraso superiores a un año.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

La rubrada aceptaba candidatos, que incluso podían estar en situación de Riesgo alto y/o Irrecuperable.

Asimismo, en dicho documento se consigna que ‘todos los operadores deberán contratar el seguro de ART con el broker que Dia designe en el momento del alta’.

• **‘FORMULARIO DE ACEPTACIÓN PROPUESTA COMERCIAL - MODELO COFO’:**

Siendo un formulario de adhesión, el ‘candidato’ debe marcar con una cruz condiciones de aceptación (sin posibilidad de negociar cláusulas ni condiciones). Dentro de estas condiciones de aceptación, se estipula el canon que se percibirá (5%), y además se establece una disponibilidad ‘Full Time’ del candidato (pregunta 6) y si ‘Se le informo que va a trabajar con el estudio que le indique DIA’ (pregunta 9).

• **‘FORMULARIO DE EXCEPCIÓN DE INGRESO DEL SOCIO ESTRATÉGICO - GARANTÍA NO CUMPLE CON CRITERIOS DEFINIDOS’**

• **‘FORMULARIO DE EXCEPCIÓN DE INGRESO DEL SOCIO ESTRATÉGICO - SEGUNDA GESTIÓN SIN GARANTÍA’** (cfr. fs. 5438/5463 de la Orden de Intervención N° 1770079; el resaltado es de la presente).

Sobre este punto, también resulta relevante transcribir el correo enviado el 6/4/2018, desde la dirección javier.mesones@diagroup.com (correspondiente a Javier MESONES del área de “Expansión de Franquicias”):

“Rafa, Gastón: Esto es un pequeño brief que apporto para ir aportando orden primero e ideas que ustedes sabrán aplicar [...] PLAN de EXPANSION con PAMI Búsqueda de Socios estratégicos. La idea principal es lograr armar reuniones orientativas, como los desayunos, en distintas localidades según el planning de la compañía o como estrategia de nuestro departamento. Hemos contactado a un Director del PAMI, fruto de la relación de amistad con la Dirección Nacional de Pami y luego de explicarle nuestra intención y plan de abrir franquicias, entendió que nos puede brindar potenciales socios. En la presentación este contacto pudo valorar el hecho de sumar oportunidades laborales en general y de emprendedores en particular para mejorar el desarrollo económico de las distintas localidades donde podamos implementar nuestras intenciones. El PAMI tiene, no sólo una base de datos grande, sino relaciones con la comunidad muy fluidas y dinámicas. Nosotros nos preguntamos en qué nos puede sumar un jubilado a nuestro negocio y llegamos a la siguiente conclusión: Contrás: Edad (según nuestras condiciones) - Oportunidades: Experiencia, Garantía propietaria, Familia descendente con pocos o MUCHOS potenciales Socios y manos derecha a quien recomendar ó APADRINAR. [C]abe agregar la cada vez mayor expectativa de vida de las personas y la vitalidad que, en su mayoría, tienen los candidatos a la edad jubilatoria. Las ganas de seguir haciendo cosas para no perder estado físico y/o mental. No hablan entre ellos de otra cosa que no sean las actividades que desarrollan, como mérito ante todos [...] Es por todo lo expuesto, que deberíamos llevar a cabo una presentación a este Director (PAMI Azul y





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

aledañas zonas de su influencia) en particular y luego ir realizando lo mismo con los Directores de otras localidades o zonas geográficas”.

En línea con lo anterior, la inspección acreditó que era la firma matriz quien afrontaba el pago de los alquileres de los locales comerciales, tramitaba las habilitaciones municipales y abonaba los servicios básicos como luz y agua. Se constató la existencia de una estricta subordinación técnica y jurídica, materializada a través del control absoluto del flujo de fondos, toda vez que la recaudación en efectivo no era administrada por el franquiciado, sino retirada periódicamente por empresas transportadoras de caudales, como MACO o BRINKS, contratadas directamente por **DIA ARGENTINA S.A.** Por su parte, la empresa detentaba la propiedad exclusiva de los controladores fiscales, el software de gestión operativa y las terminales de pago electrónico. Adicionalmente, el organismo fiscal probó que los franquiciados carecían de facultades de organización empresarial, estando sometidos a inventarios mensuales realizados unilateralmente por personal de la firma central sin posibilidad de contralor propio. Las diferencias y faltantes arrojados por dichos inventarios generaban un ciclo de endeudamiento perpetuo y liquidaciones negativas, en el cual el responsable del local debía solicitar adelantos pecuniarios a **DIA ARGENTINA S.A.**, instrumentados mediante la emisión de facturas, para poder hacer frente al pago de los salarios de sus dependientes formales.

Para robustecer la apariencia de legalidad, la imputada imponía o sugería de manera ineludible la contratación de estudios contables específicos, los cuales se encargaban de tramitar las altas y bajas laborales, liquidar los sueldos y generar los volantes de pago de las obligaciones de la seguridad social, cuyos fondos eran transferidos por **DIA ARGENTINA S.A.** a una cuenta del franquiciado a tal único fin.

Este andamiaje probatorio se encuentra corroborado, con el estándar requerido para esta etapa del proceso, por -entre otros elementos- el análisis de aproximadamente 20.000 correos electrónicos corporativos secuestrados en el marco de esta pesquisa. Las comunicaciones internas revelan que los mandos gerenciales de la compañía tomaban decisiones directas relativas al cierre de tiendas, la asignación y traslado de los supuestos socios, y la desvinculación de los trabajadores a cargo de estos, incluyendo directivas respecto del personal no registrado. Incluso, se acreditó documentalmente que la matriz llegó a abonar deudas personales de tránsito o juicios de apremio de los prestanombres con el fin de evitar clausuras municipales, ejerciendo un control de hecho, económico y disciplinario que excede holgadamente los límites permitidos para un contrato comercial de franquicia.

En tal sentido, la ex A.F.I.P. sostuvo en su informe final de fiscalización, que del análisis de los correos electrónicos obtenidos a raíz de la orden de presentación dispuesta por esta judicatura (cfr. DVD obrante a fs. 3209 de la Orden de Intervención N° 1770079), surgen las siguientes cuestiones relevantes:





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

“► La operatoria llevada a cabo por Dia Argentina SA para realizar la búsqueda de las personas que serán luego asignadas a una tienda, quienes **previamente son entrevistados por RRHH de la empresa.**

► Ante cualquier inconveniente edilicio que surja en cualquier tienda **el contribuyente es quien se ocupa de solucionarlo.**

► Se determina la asignación/traslado de personal de la franquiciada INTERSUPER SA a otras tiendas. **Utiliza la fuerza de trabajo de esa sociedad para resolver situaciones en otras tiendas o bien hasta la incorporación de un nuevo franquiciado en reemplazo de otro.** (ref.pág. 11)

► La incorporación del personal de la franquiciada Intersuper SA se realiza en las oficinas de **RRHH de Dia Argentina SA**

► Queda plasmado que **ante el cierre de una tienda existe reubicación de empleados a otra tienda franquiciada y poseen poder de decisión sobre la baja del personal.**

► **Se organiza el cierre de una tienda por la noche por bajos rendimientos de la misma sin el consentimiento del franquiciado**

► Se analiza la incorporación de un Socio Estratégico. Dicha persona ya estuvo vinculada por tal motivo se analiza al hijo y Luego se confirma que los mismos fueron desvinculados mediante un acuerdo laboral

► Se menciona un **despido de una empleada embarazada y un trabajador que estaba en ‘negro’ en tienda.** (ref.pag. 20)

► Listado de tienda clausuradas por distintos motivos, ratas, no contar con habilitación municipal, etc.

► Se entrega a los jefes de tiendas propias y a los líderes de tiendas (socios estratégicos) un instructivo con las disposiciones a llevar a cabo, para el caso de presentarse inspecciones del GCBA, entregando copia firmada de recepción.

► Se realizan auditorias internacionales en tiendas propias o a cargo de SE. Se imparten instrucciones a tener en cuenta a esos efectos.” (el resaltado corresponde a la presente).

Por su parte, en el mencionado Dictamen Jurídico N° 95/2023 el fisco nacional destacó los siguientes correos electrónicos:

- “Fecha: 21/03/2018 Remitente: Martín de la Borbolla (Gerente de Administración Socios Estratégicos) Asunto: Re: COFO SOLICITUD CONTRATO TIENDA 492 - FIZ MARTIN ALEXIS (Traspaso tienda 301)

‘Dani este es un caso que hablamos en la **reunión de planificación de bajas de este mes.** Pero dadas las circunstancias sobre esta tienda, **avancemos con el traspaso a la nueva tienda** y luego veamos que definición tomamos en los próximos meses. Sdos’’;

- “Fecha: 25/04/2018 Remitente: Pablo Núñez Asunto: Re: COFO SOLICITUD CONTRATO TIENDA 492 - FIZ MARTIN ALEXIS (Traspaso tienda 301)





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

‘Diego, en la última reunión que mantuvimos con el SE fue para convencerlo de que abra la tienda 301, para luego pasarlo a la 492, por falta de gente. Desde ADM SE sugerimos la baja en ese momento. Hoy el SE tiene una deuda total al mes de Marzo de \$520 K. Deberíamos volver a ver si conviene que siga gestionando las tiendas. Sds’” ;

- “Fecha: 05/04/2018- Remitente: Andrea Castello (Gerente Regional de Ventas)

Asunto: Re: Reapertura de tiendas cerradas

‘Hernán, como estas? Te adjunto la info de Tiendas cerradas al día de hoy, sumé los motivos y en las observaciones también dejé asentado los problemas de cada tiendas y las que son cierres definitivos Nótese que en el cuadro adjunto al presente correo electrónico se consigna ‘el socio fue trasladado a otra tienda’”

”;

- “Fecha: 02/08/2018 Remitente: Sergio Gallardo sergio.gallardo@diagroup.com

(Gerente Regional de Ventas) Asunto: Re: Cierre Definitivo 5218

‘Estimados Todos La tienda estaba programada para cierre definitivo el día 23 de Abril del corriente año. Luego por motivos que desconozco no se realizó la misma. Este mes la tienda esta panificada dentro del Objetivo de Ventas, por lo tanto lo que deberíamos hacer es Planificar la baja para el mes de Septiembre. Si ver de la ultima semana de Agosto de recortar el planing y solicitar desde ahora las acciones comerciales que nos aseguren licuar la mercadería por un lado y lograr el objetivo de unidades del mes por el otro. De esta forma vaciamos la tienda, en Septiembre ya no se le coloca objetivo de venta y se procede al desmantelamiento y cierre contable. Hay que ver con el actual SE si se le da otra tienda o se procede a la baja del personal a su cargo. Saludos.’” ;

- “Fecha: 26/04/2018 Remitente: Mauro Avalos (Asesor de Rentabilidad - Socios

Estratégicos) Asunto: Fvvd: Estado de cuenta Socio 265

‘Martín. buenos días. Te paso la simulación de la tienda 265, díganme uds que datos quieren que incluya distintos para modificar. Mi pregunta es sobre los reclamos que nos hizo el socio las veces que hable por teléfono y por su mail, si el GV pudo analizar la cuenta que nos paso el socio? Viene de perdidas de 70k 130k y 210k y según la simulación enviada por mail este mes le daría 15k?? No sería real armar una simulación con estos datos, Yo preguntaría primero que plan de PD se hizo en la tienda? El porque de estos resultados? ya que esto paso los últimos 5 meses, anteriormente la PD de la tienda estaba por debajo de 2%. Sabiendo que estaba la reforma de la tienda porque no se le bajo el objetivo de venta para que lo alcance, entendiendo ahora que el socio reclama que no llega a la venta por los recortes de servicios. El EDIT de la tienda del ultimo año es de -7,2%, cuanto mas podemos aportar para que esta tienda nos sea a todos rentables? Tuvieron la oportunidad de bajarle la liquidación al SE? porque agradece el llamado de Sergio indicándole el aporte de \$40k de este mes, pero del resto de los puntos no menciona nada. Hable con el socio y le explique esto y que le daríamos anticipos para cubrir los gastos de impuestos y empleados e ir viendo mes a mes su cuenta en





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

tanto mejore los resultados tendrá acompañamiento nuestro, me paso los gastos y están acordes con lo que nosotros tenemos teóricos. Creo que esto ultimo es mas coherente que armar una simulación en que la PD baja un 90% de un mes a otro cuando viene subiendo mes a mes un 60%. Puntos que tendríamos que trabajar para cumplir con esta simulación. -La PD debería dar \$50k Abril, \$40k mayo y luego sostenerse en \$30K -El Objetivo de venta este mes ya no lo cumple, deberían bajarlo para que alcance el 120% los próximos 6m. -Cobrar el club de expertas todos los meses (los viene cobrando) -Anticipos por \$160k todos los meses para cubrir los gastos del socio, y \$200k en julio por aguinaldos”” ;

- “Fecha: 26/04/2020 Remitente: Mauro Avalos (Asesor de Rentabilidad - Socios Estratégicos) Asunto: Fvvd: Estado de cuenta Socio 265

‘Con esto, en Agosto torceríamos la liquidación a positivo, y no haría falta financiar al SE. Si necesitas algún dato mas, me avisan Saludos.’” ;

- “Fecha: 27/04/2018 Remitente: Sergio Gallardo (Gerente Regional de Ventas) Asunto: Fwd: Estado de cuenta Socio 265

‘Mauro Muchas gracias por tu análisis. Como indicas el análisis de la perdida de este SE es incorrecta, ya que tenia que tener inventario el 04-04-18 y el mismo no se realizo. No se de donde saca que le dará \$ 15.000. Y no creo que aunque armemos plan el tenga mucho interés o dedicación. Por otro lado hablando con el SE y luego con el Sr Fernando Llanos, no vemos que el cambie su postura en cuanto a lo operativo. El vive frente a la tienda, su Sra primero por dar a luz y ahora por que la bebe es chica no tiene presencia. El no cuenta con manejo de personal Recomendando la baja del SE. El tema es que tenemos que tener el reemplazo. Creo en este punto que Fernando tiene el mismo (441 para doble gestión que en vez de tomar Tandil haría lo propio con esta), por lo que te solicito Fernando que de ser así lo confirmes. Si este es el caso necesitamos tener la carpeta completa para presenta la semana entrante la baja de este SE. Si Fernando LL confirma que tiene el SE de reemplazo y si este es el de la tienda 441, entonces la consulta a Gastón seria ¿cuando esta en condiciones de tomar tienda? ¿llegamos a re abrir la misma con un nuevo SE? Si no llegamos, entonces Adrián hay que mandar 2 o 3 Itinerantes, coordinar todo con Fernando y Andrés (locación, viáticos), y tomar el resto del personal ahí hasta el ingreso del SE. Aguardo las confirmaciones de todos para avanzar. Saludos”” ;

- “Fecha: 23/07/2018 - Remitente: Martín de la Borbolla (Gerente de Administración Socios Estratégicos) Asunto: Re: Equipos INTERSUPER 5389 a 5260

‘Buenos días. El resultado de la simulación de la cuenta de esta tienda operada por IS da un resultado negativo. Por favor avanzar con un SE en lugar de IS. Saludos’” ;

- “Fecha: 08/01/2018 Remitente: Rafael Devoto (Gerente de Ventas) Asunto: Recorrida de Tiendas





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

‘Un comentario, lo de los conteos es una vergüenza, no solo esas 8 tiendas, sino las que le siguen también, voy a empezar a aplicar multas a los SE que no cumplan con el mínimo, y ustedes deberían aplicar sanciones con los JT que no lo hagan. Saludos.’” ;

- “Fecha: 11/04/2018 -Remitente: Agustín Ibero (Director de Franquicias)
Asunto: Invitación: Planes tiendas cerradas mié 11 de abr de 2018 15:30 - 16:00 (ART)

‘Planes tiendas cerradas La idea es presentar la forma que vamos a penalizar al SOCIO el NO cumplimiento del horario de atención de tiendas franquiciadas, y los planes para reducir las tiendas en busca de SOCIOS’” ;

- “Fecha: 01/12/2017 - Remitente: Rafael Devoto (Gerente de Ventas) Asunto:
Re: F ALT ANTE T-5178 FOFO-VL \$-24.403

‘Buenos días. El SE utilizo el dinero para hacer frente a una intimación del INACAP (adjunto foto), si bien habíamos acordado cubrirlo por anticipo, el SE de manera unilateral decidió sacarlo de la recaudación. Aplicaremos la multa correspondiente en la próxima liquidación. Saludos.’” ;

- “Fecha: 12/04/2017 Remitente: Oscar Miranda Asunto: INVENTARIO BAJA SOCIO T5300

*‘Buenos días Rafael Paso los Art. con mayores diferencia que tuvimos (TGD) en la tarde/noche de ayer: * 198206 TVLED SMART47’ 1 UNIDAD -S12.999.00 * 221842 TVLED SMART43” 1 UNIDAD -SI 1.429,00 * 163406 LED 32’ SMART1 UNIDAD -S7.299.00 * 186513 REPRODUCTOR DVDX/77 3 UNIDADES -S5.037.00 *109603 CARTUCHO M4CH3/GUILLE 27 UNIDADES -S5.591.06 *215554 OBLEA DE ARROZ 423 UNIDADES -57.186. 77 (VENCIDO) *148125 MAO AFEITAR PRES.3 77 UNIDADES -S4.492.95 *90150 POLLO CONGE/DESCONG. 187 KILOS -S6.038.00 *167895 BOLSA CAMISETA 7.000 UNIDADES -S4.700.00 *199701 LAMP B/CON TWIS 11 IV 46 UNIDADES -S4.139.54 *103778 PAN DULCE 35 UNIDADES - S3.700,00 (VENCIDO)’” ;*

- “Fecha: 12/04/2017 Remitente: Rafael Devoto (Gerente de Ventas) Asunto:
BAJA SE TDA 5300

‘Maxi, No habría que hacerle una visita a la casa a este SE? En el inventario de anoche le faltó todo electro y alto robo. Como lo ves? Abrazo, Rafa’”;

- “Fecha: 04/12/2017 Remitente: Rafael Devoto (Gerente de Ventas) Asunto:
Fwd: Conteos Noviembre Cerrado - Zona Devoto

‘Esto es lo que estuvimos viendo hoy por la tarde. Insisto en que en aquellas tiendas donde no logren que los SE hagan los conteos, háganlos ustedes, es fundamental para que el APT funcione lo mejor posible, y para que la tienda cuente con la mercadería correcta. Saludos’”;

- “Fecha: 21/01/2018 Remitente: Orlando Dia Asunto: Re: Informe y Horario semanal





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

*‘Hola Gabriel te paso el informe semanal de la tda 206 . **La socia sigue sin asimilar las tareas administrativas como operativas de la tda**, si existe alguna mejora es mínima que no se nota. **No se realmente cuanto le importa el negocio ya que no hace todas las cosas que le decimos ej punteo y rectificación de falta**, delega el punteo a un cajero. En la recepción del camión le cuesta contar e identificar los bultos, no hace a diario los ingresos de GD, devoluciones, los conteos los hace mal, se equivoca y no se da cuenta, en las cantidades de un producto pone el código del producto que sigue distorsionando el stock del mismo. Sigue teniendo diferencias en la caja de cambio y con los transporte blindado, en los baja cajera se le dijo, enseñó como se hace y cuanta plata se arquea, pero ella hace todo lo contrario arquea mas de dos mil pesos, no hace las notas de crédito y hasta algunas veces arquea plata de mas que después le falta en la caja de cambio. Los fines de semana una vez que yo me retiro no se trabaja como se debe, no se repone como de costumbre, no hace limpieza, no hacen devoluciones y el lunes la tda no esta en condiciones ej el lunes pasado en el merendero estaba una bandeja de punto caliente con restos de asado, que presumo que lo hicieron en el horno de punto caliente Betiana lo vió e informó del mismo. En la semana fueron varias veces supervisores a ayudar en la tda, haciendo etiquetas faltantes cambiando portaprecios yo hice limpieza de la pileta y sector de devoluciones y esto ella no lo valora , a los dos días otra vez faltan etiquetas y el sector de devoluciones esta sucio y desordenado, ni hablar del merendero y baños. **No se cuanta confiabilidad tiene la socia, un día me preguntó si se podía llevar mercadería, pasarla como consulta y cuando tuviera plata la abonaría , obviamente le dije que no y le avisé a Betiana. En cuanto al apoyo que le brindo a veces me doy cuenta que ya no quiere que esté ahí, por contestaciones o gestos que hace cuando le marco las tareas que debe hacer y el tiempo de las mismas. Tuvimos en varias oportunidades cruces o roses de palabras por cosas que ella no hace o lo hace mal, siempre con respeto, y muchas veces se puso a llorar echándose la culpa que es una tarada porque no le quedan las cosas, que ella debería darse cuenta de las prioridades etc. Rafael fue varias veces a la tda esta semana y esta al tanto de todo lo que te dije. El viernes tiene su primer inventario en primer turno ese día voy a trabajar a la tarde.’’;***

- “Fecha: 02/11/2017 Remitente: Victoria Frangi (Asesor de Rentabilidad)
Asunto: Re: Retiras Pico // Motivos

‘Hola, les paso las retiradas pico a descontar informadas por PP, me pasan por favor los motivos.’’;

- “Fecha: 03/11/2017 Remitente: Rafael Devoto (Gerente de Ventas) Asunto: Re: Retiras Pico // Motivos

*La 5178, sacó la plata para hacer frente a unos mandamientos de AFIP y ARBA, el SE quedó en pasármelos. La plata no faltó, y de hecho la RP fue a las 8am y MACO pasó a las 14hs. **Ya hablé con el SE para recordarle que nosotros deberíamos saber antes de esto.** 5370*





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

usó la plata para saldar una deuda con Miramonte, también tiró la plata antes del último MACO y no faltó. Saludos.”;

- “Fecha: 23/11/2018 Remitente: Darío Christ (Responsable de Expansión Socios Estratégicos) Asunto: Re: Acta ministerio de trabajo tienda 1806

*‘Javier: buen día, la socia López María Florencia está en capacitación terminando la última semana de formación. La apertura está planificada para el 30/11. En la 1806 están haciendo prácticas únicamente. **Las altas las realiza el estudio contable 48 hs antes de la apertura y así está establecido por procedimiento. La socia ingresó a formación firmando el reglamento correspondiente implementado para este fin. La socia esta en trámite con la AFIP por el alta de CU IT debido a requerimientos por cambio de domicilio que debe presentar la semana próxima. Saludos!’”;***

- “Fecha: 26/11/2018 Remitente: Martín Sepulveda (Líder de Operaciones Jurídicas) Asunto: Re: Acta ministerio de trabajo tienda 1806

*‘Buen día, Darío en este caso puntual con todos estos empleados necesitamos dar una explicación al Ministerio de Trabajo de que hacían en una tienda DIA sin ningún tipo de registración, tal como están dadas las cosas la situación es inexplicable y nos exponemos a una severa multa, **la única alternativa para defender la situación es que los empleados estén dados de alta con fecha de la inspección, de ese modo podemos relacionar a los empleados el SE y una capacitación**, nos confirmas si es posible? Gracias!’” ;*

- “Fecha: 26/11/2018 Remitente: Dario Christ (Responsable de Expansión Socios Estratégicos) Asunto: Acta ministerio de trabajo tienda 1806

*‘Buen día Martín, **pongo en copia a Pablo Nuñez y Alejandro Barrionuevo de administración quienes son los que tienen el contacto con los estudios contables y realizan en conjunto todas las tareas de pre apertura de las tiendas (altas, Afip, ART, Etc.). Saludos!’” ;***

- “Fecha: 7/05/2018 Remitente: Fernando Gerth (Responsable de Expansión de Franquicias) Asunto: Re: Estudio contable OLAVARRÍA

*‘Buenas tardes Cintia: Por favor, te solicito la posibilidad de **asignarle un estudio contable a Cristina Córdoba para la apertura de Olavarria. Para esta tienda se han caído varios candidatos por diferentes motivos, por esta causa estamos muy justos con los tiempos. Necesitamos que esta semana Cristina Córdoba realice AFIP e IIBB’” ;***

- “Fecha: 8/05/2018 Remitente: Martín de la Borbolla (Gerente de Administración Socios Estratégicos) Asunto: Re: Estudio contable OLAVARRÍA

*‘Perfecto. **Asignen estudio Arce que es de Olavarria. Sdos’” ;***

- “Fecha: 07/08/2018 Remitente: Alejandro Ruiz (Jefe de Coordinación Dirección de Socios Estratégicos) Asunto: inspección municipal tienda 5457 mdp e intento de clausura urgente!!!

‘Andrés, como estas? Primero me gustaría aclarar, que ni los inspectores ni la municipalidad quieren perjudicarnos, clausurarnos la tiendas ni nada parecido. Si hubo una





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

mala comunicación interna entre los diferentes sectores de la municipalidad y por eso hoy hicieron estas inspecciones, lo cual ya esta solucionado. En referencia al circuito, creo que el mismo esta bastante aceitado, mas teniendo en cuenta los detalles que paso a enumerar de cada tienda, por lo que no deberíamos tener problemas para seguir funcionando con normalidad.

Tienda 5457, al día de hoy están solucionando un error en la inscripción de IIBB ya que inscribieron al SE como 'Servicio de transporte automotor de carga' con este rubro no te habilitan un autoservicio. En cuanto nos pasen esto corregido, nos darán la habilitación. Según hablado con administración mañana lo tendríamos.

Tienda 5445. el SE tiene varias deudas de transito y deuda municipal judicializada. La cual nuestro gestor la esta solucionando, tengan en cuenta que al estar judicializada se trata de un juicio de ejecución, por lo que los tiempos ya no son solo los de la municipalidad sino también los del tribunal.

Tienda 5389, recuerden que es una tienda que ya contaba con habilitación y la misma fue una reapertura hace menos de 20 días, donde todos sabíamos que abríamos sin ningún papel por el apuro de abrir y no dejar la tienda cerrada. Al margen de esto, los papeles ya están próximos a salir. Independientemente de todo esto, nuestro contacto ya hablo en la municipalidad y no van a realizar las inspecciones de las que hoy hicieron referencia. Saludos, Alejandro'';

- "Fecha: 13/08/2018 Remitente: Andrés Maradona Asunto: Re: inspección municipal tienda 5457 mdp e intento de clausura urgente!!!

'les paso el resultado de la inspección de la tienda 5445 de mar del plata. realizaron la actas de clausura, la tienda no posee ningún papel en tienda, ni provisorios ni definitivos, no tenemos rebu ni habilitación ni documentación de uso de suelo nada...les pido por favor que alguien de legales se comuniquen con el socio y le explique la situación y como sigue por favor, para poder mas que nada tranquilizarlo y que sepa como se esta procediendo, el numero es 2235599291 sr. lamben, la tienda por el momento sigue abierta hasta mañana ya que le dejo el inspector todas las actas de clausuras ya labradas y mañana procederá a clausurar y ya no se podra hacer nada'';

- "Fecha: 13/08/2018 Remitente: Alejandro Ruiz (Jefe de Coordinación) Asunto: Re: inspección municipal tienda 5457 mdp e intento de clausura urgente!!!

'Andrés, Después del mediodía vamos a tener un panorama mas claro, la idea es evitar la clausura de mañana. Tengan en cuenta que la tienda no tiene ningún papel porque el SE (Lambert) tiene deudas varias con la municipalidad de MDQ, como el SE no lo soluciono nosotros lo estamos solucionando y abonando (obviamente re-facturaremos los costos y honorarios al SE). El día viernes pagamos ABL de una propiedad suya y multas de transito personales, en el día de hoy abonamos Honorarios de una abogada de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon que le inicio un juicio de apremio por deudas, los aportes del colegio profesional de la abogada, tasa de justicia y el capital de dicho juicio. Hoy gracias a esto el SE





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

no tiene deudas, por lo que estamos avanzando en el día de la fecha con el tramite. Por lo que el SE se puede quedar tranquilo que le solucionamos sus deudas personales y ya vamos a poder proseguir con el tramite de la habilitación, por lo que es probable que podamos parar la clausura. Si necesita algo mas se puede comunicar con nosotros. Saludos, Alejandro.”;

- “Fecha: 18/06/2018 Remitente: Sergio Gallardo Asunto: Re: Tda 41 fin de gestión

‘Martín Lo acordado es que nosotros nos hacemos cargo de las desvinculaciones. Respecto a la fecha creo lo mejor es coordinado con Fernando Ll. Quizás el 29 por cuestiones de tener mes completo pero que lo decida el Saludos’”;

- “Fecha: 18/06/2018 Remitente: Martín Sepulveda Asunto: Re: Tda 41 fin de gestión

‘Fernando/Sergio en este caso los empleados como quedan asumieron el compromiso con la SE que la empresa se haga cargo? traslada a los empleados? si la gestión de la tienda fofo la toma el 29 y no el 21, avanzamos hoy o aguardamos a fin de mes para tenga la liquidación completa.? Gracias!’”;

- “Fecha: 07/05/2018 Remitente: Nicolás Gómez (Jefe de Créditos y Cobranzas) Asunto:Re: EX SE Alejandra Muñoz

‘Estimados, Esta persona se fue de la empresa con una deuda de S200 K aproximadamente. La misma realizo una denuncia laboral la cual fue cerrado en CECLO por el depto. de Legales (se le condono el 100% de la deuda). FAVOR DE NO AVANZAR. - Saludos’”; y

- Fecha: 18/07/2017 Remitente: cesar barrecca Para: raphael.devoto@diagroup.com Asunto: Liquidaciones finales - Planilla Empleados, tienda 206 y 350

‘Hola Rafael te paso las liquidaciones finales, y listado de empleados de la tienda 206 y 350. En el listado esta aclarado, la empleada embarazada y la empleada en negro. por favor pásalo sin falta, asi los llaman, muchas gracias En otro mail, te voy a pasar las Bajas en Afip. Saludos’” (el destacado corresponde a la presente).

En la misma línea, del resultado de las intervenciones telefónicas (cfr. documentación reservada en Caja 4 e Informes del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal Argentina de fechas 6/2/2019 -fs. 188/191-, 18/2/2019 -fs. 202/204-, 22/2/2019 -fs. 206/208-, 6/3/2019 -fs. 245/247-, 7/3/2019 -fs. 227/244- y 11/3/2019 -fs. 252/275-) se desprende que la relación entre la empresa y los posibles franquiciados era de una clara subordinación, tal como surge de las siguientes transcripciones:

- conversación del 31/1/2019 (acta de fecha 5/2/2019, desgrabación y transcripción del CD N° 1): “**Rodrigo** se comunica con **David**. **RODRIGO**: ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? **DAVID**: estuve viendo, tengo otra que está trabajando en DIA, que está justo cubriendo. Estuve viendo si conseguía a alguna más, tengo que entrevistarla. Trabaja para una





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

concesión en provincia, es encargada, pero ahora está complicada con los horarios porque otros se fueron de vacaciones. **RODRIGO**: ¿Cuándo vuelve el titular? **DAVID**: en dos semanas. **RODRIGO**: ¿No hay posibilidad de que una mañana llegue más tarde? pregúntale eso **DAVID**: tiene todos los cursos hechos, pero hay que chequearlo. **RODRIGO**: Pregúntale si hizo todos los cursos de CGO, CGN. Yo te puedo aguantar para que se ordene, para poder meterte en alguna tienda, no tengo problema, te aguanto todo lo que sea para que encuentres una mano derecha, cuando lo consigas, yo organizo la entrevista con Recursos Humanos y listo le damos derecho. **DAVID**: te hago una consulta, si es que tiene hecho los cursos ¿para Marzo ya estaría todo listo? **RODRIGO**: si, inclusive hasta Febrero podría ser. Para los últimos días, porque si tiene los cursos, solo podría llegar a demorar el tema de ingresos brutos, AFIP, la escribanía y demás. Sería ideal que vaya la semana que viene. Tenes que ser más duro con tu mano derecha, anda a buscarlo. Yo te tengo que dar la tienda y cuando tengas esa mano derecha, convence a alguien, yo te doy la tienda y después que hace lo que quiera. **DAVID**: Bueno. Bueno dale, gracias.”

- conversación del 5/2/2019 (acta de fecha 5/2/2019, desgrabación y transcripción del CD N° 1): “**Rodrigo** se comunica con **Leo**: **LEO**: Te quería hacer una consulta, el tema de los cursos... ¿Ya están las fechas confirmadas? Vos me habias dicho el 18 creo. **RODRIGO**: Si, si es lo ideal, primero te tiene que ver el gerente que me iba a confirmar hoy si te podia ver esta semana a vos y a tu nueva mano derecha y ei claro que si. **LEO**: Si, porque yo quería avisar on mi trabajo, porque ya tendría que dejar. **RODRIGO**: Bueno, dejame que ya te lo confirmo, hablo con el gerente. **LEO**: El horario era de 9 a 16 de la tarde masomenos ¿no? **RODRIGO**: Si exactamente ahí en Pellegrini. **LEO**: Otra consulta, mis hermanas y mi cuñado, los titulares de la garantía, están ahora aca en Salta, pero trabajan en Buenos Aires. ¿Cómo es el contrato? ¿Ellos tienen que firmar algo? **RODRIGO**: Nono, a ellos los necesito tiempo después. El contrato lo firmas vos solo, dco puco lo quo scribe le garantía, para garantizar la tienda tiempo después, entre 1 mes o 2 meses después voy a necesitar que ellos están en Salta. ¿Ellos viajan seguido a Salta? **LEO**: Nono, ellos vinieron ahora, trabajan on Buono Airco, olloo con guarda cárceles federal. Ellos se vuelven el 16 para allá. **RODRIGO**: Bueno en ese caso vemos como vamos a hacer. **LEO**: Lo necesitaba para ocupario ahora. **RODRIGO**: Pasa que es poco tiempo de acá al 16 para hacer al firma de la garantía Gracias por avisar, vamos a ver si podemos hacer algo, Por lo pronto yo te aviso hoy cuando es la entrevista con el gerente. **LEO**: Otra consulta, el curso lo hago yo y mi mano derecha ¿no? **RODRIGO**: Exactamente, le primora y la segunda semana. Luego a milad de la segunda semana me mandas los cajeros. Van a tener que hacer un curso virtual que Uds, también tienen que hacer, y ellos entran recién en la tercer semana. **LEO**: La presencia mia y de mi mano derecha. ¿Vos la necesitac por 2 ocmanaa- **RODRIGO**: Nono la de Uds por 5 semanas, la de los cajeros por tres. **LEO**: Ah bueno bueno. **RODRIGO**. Dale cualquier otra duda que tengas me llamas. **LEO**. Gracias por la data.”; y





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

- conversación del 6/2/2019 (acta de fecha 8/2/2019, desgrabación y transcripción del CD N° 6): “**Rodrigo se comunica con Luis. LUIS:** *Hola Rodrigo ¿cómo estás?* **RODRIGO:** *¿Cómo estás Luis? ¿Podes conversar?* **LUIS:** *Sisi puedo.* **RODRIGO:** *Necesito avanzar con el curriculum, enviame los dos.* **LUIS:** *Si ya lo tenemos.* **RODRIGO:** *Bueno genial mándamelos que ya estamos avanzando, la semana que viene los tiene que ver Leonardo Aguilar que es el gerente de ventas. Vamos a ver como hacemos, si en algún momento ustedes van a Salta o yo le digo a el que se tienen que acercar al Joaquín V Gunzález. Yo ya les saque un par de informes, salieron bien* **LUIS:** *El mio no ¿no?* **RODRIGO:** *Claro el tuyo no, obviamente. Pero el de DIEGO si.* **LUIS:** *Dieguito me dijo que ya consiguió unos lotes para la garantía.* **RODRIGO:** *¿Están escriturados?* **LUIS:** *Sisi son de él.* **RODRIGO:** *¿yo te mandé por mail todo no?* **LUIS:** *No me fije che, pero antes de las 13.30 te mando los curriculums de los dos. Porque el ca al titular ¿no?* **RODRIGO:** *Exacto el es el titular y vos sos mano derecha, pero necesito si o si los curriculums para poder coordinar con RRHH una entrevista via Skype asi los evaluamos.* **LUIS:** *Yo lo único que tengo titulo título es el de secundario.* **RODRIGO:** *Perfecto eso es suficiente. Ese es el requisito.* **LUIS:** *Yo después soy profesor de yudo, cinturón negro.* **RODRIGO:** *No, no hace falta. Acordate lo que conversamos por teléfono bien, el tema de tu laburo y todo eso con la entrevista de RRHH.* **LUIS:** *Bueno yo me contacto con Dieguito ahora.* **RODRIGO:** *Bueno y dale acordate del curriculum que lo necesito urgente.* **LUIS:** *Dale hoy antes de la 1 y media te envio eso.”.*

Finalmente, corresponde señalar que, en sede administrativa, se recepcionaron decenas de declaraciones testimoniales (cfr. Orden de Intervención N° 1770079: fs. 4861/4864 - Levit, Alejandro Rubén-, 4866/4869 -López, Darío Maximiliano-, 4874/4877 -Auñón, Juan Pablo-4884/4887 -Vega, Ricardo Ariel-, 4916/4919 -Liniers, Maximiliano Carlos-, 4927/4930 -Cabrera, María Laura-, 4936/4939 -Beber, Renzo Rubén-, 4946/4948 -Marcos, Viviana Betina-, 4963/4966 -Beber, Renzo Rubén-, 4973/4976 -Burgos, Martín Jonatan Iván-, 4977/4980 -Rosales, Luis Maximiliano-, 4990/4992 -Johanson, Mariela Janina-, 4993/4996 -Ferreira, Yésica H i Ida-, 5001/5003 -Arzamendia, María Inés-, 5006/5007 -Expósito, Norberto-, 5028/5032 -Peña Acuña, Elizabeth Julieta-, 5033/5037 -Fraqueili, Gustavo Germán-, 5038/5041 -Catania, Matías Hernán-, 5042/5045 -Fernández, Sandra Elida-, 5090/5093 -Martino, Adriana Laura-, 5095/5099 -Asencio, Christian Gustavo-, 5100/5104 -Del la Paolera, María Eugenia-, 5105/5109 -Méndez, José Antonio-, 5113/5117 -Sechi Carrasco, Rocío Natividad-, 5118/5122 -Petroni, Javier Ornar-, 5123/5127 -Márquez, Juan Carlos-, 5128/5132 -Espeche, Horacio Osvaldo-, 5133/5137 -Isla, Sergio Fernando-, 5139/5141 -Vicente, Karina Noerni-, 5142/5145 -Romero, Rocío Alejandrina Soledad-, 5146/5149 -Almirón González, María Belén-, 5159/5163 -Navarrete Peña, Tracy Marisol-, 5164/5168 -Esteche, Luis Adrián-, 5169/5173 -De Pino, Adrián Alberto-, 5174/5178 -Remuzzi, Claudio Alejandro-, 5179/5183 -Asiuto, Carina Gabriela- y 5186/5190 -Berlles, Fabio Augusto-), a las cuales cabe remitirse en razón de brevedad, que resultaron coincidentes y consistentes entre sí, en el marco de las cuales los declarantes





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

describieron una operatoria uniforme mediante la cual fueron captados y compelidos a asumir el rol de empleadores ficticios y a suscribir contratos de concesión, franquicia o consignación estandarizados -en los que únicamente se modificaban los datos personales-, careciendo de todo riesgo empresario efectivo y resultando insolventes ante eventuales contingencias de índole laboral. En concreto, la ex A.F.I.P. sostuvo en su informe final de fiscalización que *“En líneas generales los conceptos más importantes de las declaraciones testimoniales como datos distintivos obtenidos son los siguientes:*

- *El ‘franquiciado’ NO elige la tienda, se le asigna la misma.*
- *Deben firmar un pagaré y presentar una garantía prendaria o hipotecarla.*
- *La elección del local, el alquiler y la habilitación del mismo la efectúa Día Argentina SA*
- *La cantidad de empleados a contratar en la tienda la sugiere Día Argentina.*
- *Día Argentina trabaja con varios estudios contables y los ‘franquiciados’ deben elegir entre alguno de ellos.*
- *Los ‘franquiciados’ son controlados por personal directo de Día, supervisores, Inventaristas, jefes de ventas zonales, etc.*
- *EL ‘franquiciado’ no puede elegir que productos encargar.*
- *La empresa de Caudales contratada por Día Argentina retira el dinero efectivo de las tiendas.*
- *Cobran un 5% de comisión sobre ventas. Les descuentan diferencias de Inventarios, diferencias de caja etc. En su mayoría esta ecuación es negativa por lo que necesitan pedir adelantos para afrontar los pagos de AFIP y sueldos.*
- *Los controladores fiscales y los tickets se emiten a nombre de Día.*
- *Los ‘franquiciados’ que se desvincularon tienen causas laborales y los empleados, en general, llegaron a un acuerdo directo con la empresa Día Argentina SA.*
- *NO toman ningún tipo de decisión personal relacionada con la operatoria de la actividad diaria.*
- *Existen varios casos de franquiciados que siguen trabajando en la actualidad sin tener renovado el contrato.*
- *Uno de los franquiciados (Olivera Hernán Lucas) aportó copia del libro de actas que tienen en todas las tiendas, en el cual se anotan todas las observaciones con respecto al estado de la misma y que es efectuado por un supervisor de Día. Lo llamativo es lo mencionado en una de esas inspecciones donde el supervisor deja asentado que el franquiciado no se encuentra trabajando porque esta de ‘FRANCO’” (el destacado es de la presente).*

14º) Que, en función de lo expuesto, cabe concluir que la firma **DIA ARGENTINA S.A.** habría desplegado una maniobra ardida, consistente en la simulación sistemática de vínculos comerciales para encubrir verdaderas relaciones de dependencia laboral. Ha quedado acreditado, con el alcance exigido para esta etapa procesal, que los supuestos





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

“franquiciados”, “concesionarios” o “consignatarios” eran, en rigor de verdad, empleados subordinados a la contribuyente, valiéndose la empresa de la figura del contrato de franquicia como una pantalla jurídica idónea para ocultar su calidad de empleador real y, de esta forma, evadir fraudulentamente el pago de las obligaciones de la seguridad social a su cargo.

Este ardid operó en una doble dimensión:

- por un lado, le permitió a la firma omitir el ingreso de los aportes y contribuciones correspondientes a las personas físicas que eran declaradas falsamente como titulares de las franquicias; y

- por el otro, operó como un mecanismo de interposición de personas, utilizando a estos falsos empresarios como un “escudo” para colocar en su cabeza a la totalidad del personal que prestaba servicios en los locales.

Mediante esta fragmentación artificial de la nómina salarial, **DIA ARGENTINA S.A.** ocultó su verdadera envergadura como empleador frente al organismo recaudador.

La idoneidad del engaño se perfeccionó, además, mediante la obtención de un beneficio fiscal indebido derivado directamente de la maniobra de interposición, ya que la compañía fragmentó a sus dependientes bajo la C.U.I.T. de múltiples sujetos insolventes. Como consecuencia directa de este accionar, se produjo un perjuicio patrimonial efectivo a las arcas del Estado, encontrándose verificado, con el alcance exigido para un auto de procesamiento, que **DIA ARGENTINA S.A.** evadió el pago de aportes y contribuciones durante los períodos **12/2015 y 3/2016 a 12/2018**.

En ese contexto, las sumas adeudadas y no ingresadas en los períodos referidos, superan holgadamente las condiciones objetivas de punibilidad exigidas por las normas penales tributarias vigentes, verificándose montos de evasión que exceden la suma de \$ 7.000.000 (en los períodos **3/2016 a 5/2016, 7/2016 a 11/2016 y 1/2017 a 5/2017**) y \$ 14.000.000 (en los períodos **12/2015, 6/2016, 12/2016 y 6/2017 a 12/2018**).

En definitiva, la multiplicidad de conductas analizadas, la ocultación maliciosa de la relación laboral, la utilización de personas físicas interpuestas y la consecuente superación de los umbrales cuantitativos, logran abastecer plenamente las exigencias típicas objetivas de los delitos tipificados en los artículos 5 y 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799).

En suma, **DIA ARGENTINA S.A.** se habría abstraído de sus obligaciones previsionales, omitiendo declarar empleados en relación de dependencia mediante las respectivas declaraciones juradas del Sistema Único de la Seguridad Social, las cuales fueron presentadas de manera engañosa por el contribuyente. Tal ardid habría sido desplegado por la imputada, con el fin de no ingresar a las arcas del fisco nacional las sumas correspondientes a las obligaciones en cuestión.

En consecuencia, resulta posible afirmar que se encuentra acreditado en autos la materialidad de los hechos, como así también su encuadre típico desde la faz objetiva.





V.- Análisis del descargo efectuado por DIA ARGENTINA S.A.

15º) Que, llegados a este punto, frente a los argumentos vertidos por la defensa técnica de **DIA ARGENTINA S.A.** (cfr. considerando 5º y fs. 1685/1744), cabe contraponer que la instrucción ha reunido elementos de convicción suficientes para desvirtuar la pretendida autonomía de los franquiciados y la licitud del modelo comercial invocado. Si bien la defensa sostiene que nos hallamos ante una “economía de opción” encuadrada en la libertad de formas, la realidad económica de los hechos revela una interposición de personas y una simulación de actos jurídicos orientada exclusivamente a eludir las obligaciones de la seguridad social.

En primer lugar, resulta inviable sostener que los franquiciados actuaban como empresarios independientes que asumían el riesgo de su propio negocio. La prueba documental y testimonial acredita que la inversión inicial era ínfima o inexistente, limitándose en la mayoría de los casos a la firma de pagarés en blanco y la constitución de garantías que funcionaban como mecanismos de coerción y no como aportes de capital genuinos. Esta pretendida “independencia empresarial” se ve pulverizada por la realidad financiera de los supuestos franquiciados: la fiscalización comprobó que la firma debía asistirlos de forma recurrente mediante “anticipos” monetarios para que pudieran afrontar obligaciones básicas, tales como el pago de haberes y cargas sociales. Esta asistencia financiera constante demuestra que los titulares no poseían giro comercial propio ni solvencia independiente, funcionando en los hechos como meros administradores de fondos provistos por la propia contribuyente.

En segundo lugar, el argumento defensivo que reduce los controles a una finalidad “preventiva” para resguardar la marca cae por su propio peso ante la evidencia del manejo operativo directo. El análisis de las intervenciones telefónicas y de los más de 20.000 correos electrónicos corporativos revela que el área de Recursos Humanos de **DIA ARGENTINA S.A.** no solo supervisaba, sino que intervenía directamente en la selección y evaluación del personal e incluso de la “mano derecha” de los franquiciados, llegando a rechazar candidatos por no cumplir con el perfil buscado por la compañía. Esta injerencia directa en la formación de los equipos de trabajo de un supuesto tercero, sumada a la potestad unilateral de decidir traslados de empleados entre distintos locales y despidos, constituye una nota típica de subordinación jurídica y técnica propia de una relación de dependencia encubierta.

Otro punto central que desarticula la versión de la defensa es el control absoluto y en tiempo real sobre el activo más crítico del negocio: la mercadería y la caja. El uso del sistema informático “llave 4” otorgaba a los supervisores de **DIA ARGENTINA S.A.** la potestad de modificar stocks y precios de manera remota y unilateral, anulando cualquier capacidad de decisión comercial del franquiciado. A esto se suma que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas exclusivamente por **DIA ARGENTINA S.A.**, y los pagos electrónicos se acreditaban directamente en sus cuentas corporativas, dejando al tercero sin disponibilidad sobre el flujo de fondos y despojándolo de la característica esencial de todo comerciante autónomo: la libre administración de sus ingresos.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Respecto a la impugnación de la metodología de la ex A.F.I.P., la defensa tilda de arbitraria la proyección basada en una supuesta “pequeña muestra” de sentencias. Tal afirmación debe ser rechazada, ya que la determinación de la deuda no fue un cálculo abstracto, sino el resultado de un procedimiento administrativo reglado que incorporó, entre otros cuantiosos elementos, el análisis de 34 declaraciones testimoniales y un exhaustivo cruzamiento de datos. El hallazgo empírico de que 2267 empleados rotaron entre diferentes franquiciados bajo la dirección de la compañía constituye una prueba objetiva e irrefutable de que la relación de dependencia era directa con **DIA ARGENTINA S.A.** y que los franquiciados operaban como meros sujetos interpuestos.

Asimismo, la existencia de fallos laborales aislados favorables a la empresa o que solo aplican la solidaridad del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no obsta al procesamiento en sede penal. La jurisdicción penal tiene por objeto la búsqueda de la verdad real, por lo que no se encuentra atada a la verdad formal de los procesos laborales, máxime cuando en este expediente se ha producido prueba de cargo (como escuchas telefónicas, correos internos y testimoniales) que no estuvo a disposición de los jueces del trabajo en aquellos procesos individuales.

De hecho, el argumento de la defensa respecto a la existencia de un supuesto “número abrumador” de sentencias que descartarían la aplicación de la figura del fraude laboral (artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo) queda palmariamente desvirtuado por su propia prueba documental. Del análisis del listado de sentencias aportado por la imputada, se constató que, en muchas de las que invoca como favorables, la empresa terminó asumiendo acuerdos conciliatorios o las sentencias fueron revocadas en su contra. Además, de esa misma documental surge que la firma resultó condenada en al menos cuarenta y cinco causas adicionales, a las que se suman las once sentencias con autoridad de cosa juzgada que, habiendo analizado a fondo la operatoria, declararon expresamente la nulidad de los contratos por fraude y simulación laboral.

Tampoco resulta de recibo el agravio según el cual las condenas meramente solidarias (artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo) convalidan la licitud del esquema comercial de franquicias. En dichos procesos, los magistrados se limitaron a fallar en función de que los propios actores orientaron sus demandas hacia la extensión de la responsabilidad solidaria, sin analizar la existencia del fraude laboral establecido en el artículo 29 de la norma fondal.

Finalmente, la tesis de que el modelo de franquicias carecía de dolo y no generaba un beneficio económico o ahorro fiscal para la empresa queda desmentida por la mecánica misma de la maniobra y el hallazgo técnico del organismo recaudador. Al fragmentar artificialmente su nómina salarial masiva en cientos de pequeños “empleadores” aparentes, **DIA ARGENTINA S.A.** montó una estructuración que le permitió atomizar su nómina salarial y obtener un provecho tributario ilícito, configurando ello el ardid exigido por el tipo penal para disminuir la carga tributaria en perjuicio del fisco nacional.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

Por lo expuesto, los argumentos defensores resultan insuficientes para conmover la base probatoria que sostiene el reproche penal contra la firma.

Efectuadas dichas consideraciones, resta analizar si corresponde o no hacer lugar la solicitud efectuada por la defensa de que se realice una amplia pericia contable y se dispongan declaraciones testimoniales.

Cabe resaltar, en primer lugar, que en función de lo que se señaló en los párrafos que anteceden, no se advierte en esta instancia la necesidad o relevancia de producir esas medidas. En tal sentido, obran en el expediente sobrados elementos probatorios para tener por acreditada, con el alcance requerido en esta instancia, la comisión de los hechos investigados, presentándose las medidas propuestas como diligencias meramente dilatorias.

Por lo demás, cabe expresar que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino sólo las que estimaran pertinentes y útiles a fin de “... *comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad*” (cfr. art. 193 del C.P.P.N.), como así también que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ha expresado que “... *por la normativa procesal vigente, en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a valorar todos y cada uno de los elementos de prueba incorporados al legajo ni a pronunciarse sobre todos los descargos efectuados por el imputado, ni a producir todas las medidas de prueba solicitadas por aquél*” (cfr. C.N.A.P.E., Sala “B”, Reg. N° 12/2016) y que “...*si bien la ley procesal contempla que las partes puedan proponer diligencias, también establece que el juez las practicará cuando las considere pertinentes y útiles sin que su resolución sea apelable (conf. art. 199 del Código Procesal Penal de la Nación). En resguardo de esa proposición el artículo 354 del citado código prevé que las partes puedan ofrecer prueba dentro de los diez días de la citación a juicio, por lo que esa cuestión no puede causar agravio al apelante.*” (cfr. C.N.A.P.E., Sala “A”, Reg. N° 604/16).

VI.- De la resolución que corresponde adoptar respecto de la persona jurídica DIA ARGENTINA S.A.

16º) Que, sobre la responsabilidad de **DIA ARGENTINA S.A.**, cabe recordar que el artículo 13 del actual Régimen Penal Tributario indica que: “...*cuando los hechos delictivos previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrá a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente...*”.

Por lo tanto, de aquella norma se infiere la voluntad del legislador de reconocer la responsabilidad penal de los entes ideales.

Si bien el Código Penal, en su parte general, no prevé la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas, lo cierto es que del propio artículo 4 de aquél cuerpo normativo, se establece la prevalencia de la norma especial en el caso de un conflicto, en tanto





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

reza: “*Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario*”.

Por lo tanto, la circunstancia de no estar prevista la responsabilidad de las personas jurídicas expresamente en el marco del Código Penal, en nada obsta a la viabilidad de su reconocimiento en el ámbito normativo de la ley penal tributaria, norma especial que regula los ilícitos de esta índole. En efecto, a partir de la modificación de la ley N° 24.769 (según texto incorporado por la ley N° 26.735), antecesora directa del actual Régimen Penal Tributario, se estipula como requisito para la aplicación de sanciones a la persona jurídica, la comisión del hecho incriminado en nombre de la persona de existencia ideal, con la intervención de ella o en su beneficio.

En ese marco, se advierte que la ley adopta un criterio amplio de atribución de responsabilidad en tanto cualquier hecho cometido por una persona física que cumpla con uno de los tres elementos antes enunciados, compromete a la persona jurídica.

Cabe destacar entonces lo sostenido por la doctrina, en cuanto a que “...*el hecho sea realizado en beneficio de la empresa... supone claramente que la evasión se ha efectuado a favor de la persona jurídica; en lenguaje, al menos, corriente: que la empresa ha evadido el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y/o previsionales...*” (Borinsky, Mariano Hernán, Galván Greenway, Juan Pedro, López Biscayart, Javier y Turano, Pablo Nicolás, “Régimen Penal Tributario y Previsional. Ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735”, Editorial Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, primera edición, 2012, pág.179).

Es decir, ese beneficio debe ser obtenido como consecuencia de la maniobra delictiva. Trasladando lo antedicho al presente caso, corresponde remarcar que **DIA ARGENTINA S.A.** habría evadido el pago de los aportes y contribuciones destinados al Sistema Único de la Seguridad Social, correspondientes a los períodos **12/2015** y **3/2016** a **12/2018**; puesto que esa sociedad resultaba ser el sujeto obligado frente a esos tributos, beneficiándose con ello de las maniobras desplegadas y que resultan ser el objeto de investigación de la presente, generándose como consecuencia de aquel accionar ilícito una rentabilidad mayor.

De esa misma forma, también se acreditó la intervención en los hechos de personas humanas que ejercían, en ese momento, la presidencia de la persona jurídica y la administración real en los hechos.

En el presente caso, la imputación se verificó respecto de Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO (por los hechos relativos a los períodos 2015, 2016 y 2017, puesto que fue presidente desde el 1/1/2015 al 1/2/2017 -cfr. Memoria y estados contables al 31 de diciembre de 2014, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016, reservados en Secretaría en la caja N° 4-), Philippe DUCAROUGE (por los hechos relativos a los períodos 2017 y 2018, puesto que fue designado presidente el 1/2/2017 y el 3/4/2018 -cfr. Memoria y estados contables al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017, reservados en Secretaría en la caja N° 4-), Emilio Ignacio HARDOY (por los hechos relativo al período 2018,





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

puesto que fue designado vicepresidente el 3/4/2018 -cfr. Memoria y estados contables al 31 de diciembre de 2017, reservado en Secretaría en la caja N° 4-) y José Luis LÓPEZ (por los hechos relativos al período 2018, puesto que firmó como presidente el estado contable al 31/12/2018 -cfr. Memoria y estados contables al 31 de diciembre de 2018, reservado en Secretaría-), quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria, las cuales no se llevaron a cabo en virtud de que, con posterioridad a ello, se resolvió declarar extinguida la acción penal -en los términos previstos por el artículo 10 de la Ley 27.541- y dictar sus sobreseimientos (cfr. fs. 454 del incidente N° CPE 1460/2018/4).

Cabe destacar que los sobreseimientos de las personas físicas fueron confirmados por la Alzada y se encuentran a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de los recursos de queja correspondientes a los incidentes de recurso extraordinario Nros. **CPE 1460/2018/6/1/1/RH8** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por la A.R.C.A. en su carácter de parte querellante, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal el 20/5/2025 en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/6/1, relativo a la concesión de la aplicación de los beneficios de la ley 27.541 con relación a Emilio Ignacio HARDOY, Alejandro Javier GRANDE, José Luis LÓPEZ, Miguel Ángel IGLESIAS PEINADO, Fernando Alberto LAVENAS y Philippe DUCAROUGE) y **CPE 1460/2018/13/1/1/RH10** (vinculado a la queja por extraordinario denegado interpuesta por la A.R.C.A. en su carácter de parte querellante, contra lo resuelto por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el Incidente de Recurso Extraordinario N° CPE 1460/2018/13/1, relativo al sobreseimiento dictado respecto de Antonio COTO GUTIÉRREZ en los términos de la ley 27.541).

Finalmente, resulta oportuno señalar que la persona jurídica se encuentra activa y debidamente representada, por lo que su participación en el presente proceso penal se produce con todas las garantías de quien es imputado.

En suma, los elementos antes enunciados permiten concluir que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el artículo 13 del actual Régimen Penal Tributario para ordenar el procesamiento de la razón social **DIA ARGENTINA S.A.** con relación a los hechos vinculados a los períodos **12/2015 y 3/2016 a 12/2018**.

17º) Que, por lo demás, debe destacarse que “...*Para el dictado del auto de procesamiento se requieren elementos de prueba por los cuales, al menos, se permita comprobar la existencia de un estado de probabilidad con respecto a la comisión del delito investigado, y a la participación culpable del indagado en aquel hecho...*” (cfr. C.N.A.P.E., Sala “B”, Regs. N° 553/99, 1125/04, y 407/05, entre muchos de esa sala). En ese orden, se ha señalado que “*Los códigos argentinos...requieren para dictar la resolución de mérito (procesamiento) ...‘que hubiere elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquél es culpable como partícipe de éste’...aluden indudablemente a la probabilidad positiva, como fundamento de la decisión a la que hace referencia, esto es, a la*





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

necesidad de que el juez que emite la decisión funde la culpabilidad del imputado como participe en un hecho punible, con el grado de probabilidad...” (cfr. Julio B.J., MAIER “Derecho Procesal Penal”, Editores del Puerto, Buenos Aires, año 1999, 2ª Edición, págs. 846/847).

VII. Monto del embargo

18º) Que, en cuanto al embargo, a los fines de garantizar el cumplimiento de las eventuales y diversas obligaciones establecidas por el artículo 518 del C.P.P.N., se tendrán en cuenta los montos ajustados por la fiscalización en los períodos **12/2015** y **3/2016 a 12/2018** menos los pagos a término (\$ 579.173.127,25), la posibilidad de que se aplique la pena de multa prevista por el artículo 22 bis del Código Penal y los demás gastos producto de la tramitación de las presentes actuaciones, para disponer trabar embargo sobre el dinero o los bienes de la persona jurídica imputada hasta cubrir la suma de \$ **800.000.000** (ochocientos millones de pesos).

Cabe destacar que, a los fines de arribar a dicho monto, se tuvo en cuenta que de la suma adeudada por la totalidad de los períodos denunciados (1/2014 a 12/2018) se canceló, por distintas vías, un total de \$ 808.120.368,77 (cfr. Incidente de Acogimiento al Régimen previsto a la Ley 27.541 N° **CPE 1460/2018/4**, en particular considerando 28º de la resolución del 23/3/2023).

En mérito de lo expuesto,

RESUELVO:

I.- RECHAZAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO Y LAS MEDIDAS DE PRUEBA peticionadas por la defensa técnica de **DIA ARGENTINA S.A.** a fs. 1685/1744.

II.- DECRETAR EL PROCESAMIENTO de la firma **DIA ARGENTINA S.A.** (C.U.I.T. N° 30-68584975-1), de conformidad con lo previsto por el artículo 13 del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799), en orden a los hechos relativos a la presunta evasión previsional simple (períodos **3/2016 a 5/2016**, **7/2016 a 11/2016** y **1/2017 a 5/2017**, por sumas superiores a los \$ 7.000.000) y evasión previsional agravada por interpósita persona (períodos **12/2015**, **6/2016**, **12/2016** y **6/2017 a 12/2018**, por sumas superiores a los \$ 14.000.000), previstos respectivamente en los artículos 5 y 6 -inciso b- del Régimen Penal Tributario (según Ley 27.799), a los que se encontraría obligada la referida contribuyente; hechos que concurren materialmente entre sí -34 hechos- (artículos 306 y concordantes del C.P.P.N.; y artículo 55 del Código Penal).

III.- TRABAR EMBARGO sobre el dinero o los bienes de **DIA ARGENTINA S.A.**, hasta cubrir la suma de \$ **800.000.000** (ochocientos millones de pesos), para lo cual, deberá formarse incidente y librar el respectivo mandamiento de embargo.

Regístrese, protocolícese y notifíquese mediante cédulas electrónicas al Ministerio Público Fiscal, a la querella y a la defensa técnica de **DIA ARGENTINA S.A.**

Firme, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia mediante DEOX.





Poder Judicial de la Nación

Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2
CPE 1460/2018

